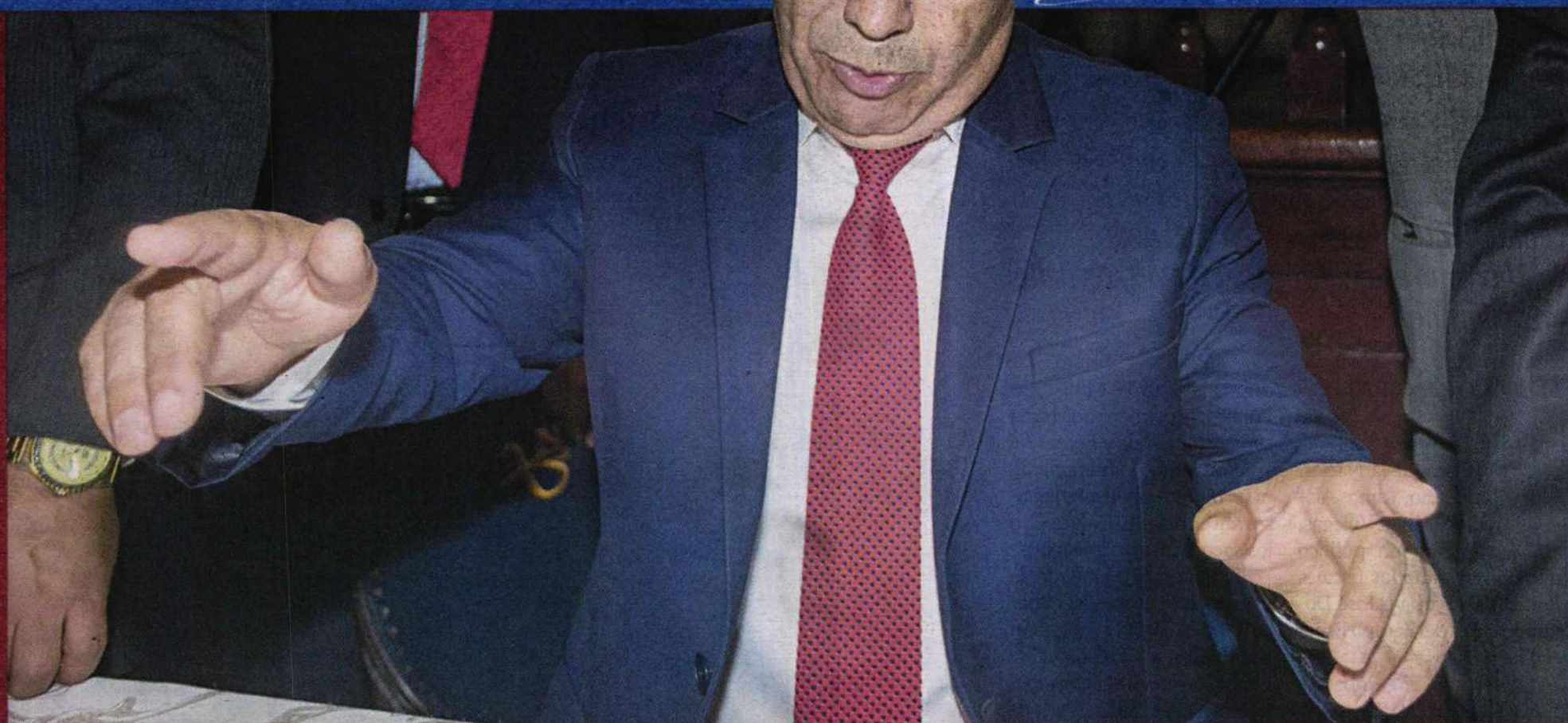


HILDEBRANDT

sus trece



Fiscal de la mafia

► Tomás Aladino Gálvez espera la sentencia del secuestrado Tribunal Constitucional sobre "el caso Cocteles" para echar a la calle a los fiscales de Lava Jato y ponerse incondicionalmente a las órdenes de la coalición que gobierna el país. El peor fujimorismo está de vuelta. Esta vez, revuelto en acuñismo

(2, 3 y 30)

Monstruo:

esta vez los topes de la
PNP no pudieron alertarlo

(28, 29 y 31)



Fiscal de la mafia

► **Tomás Aladino Gálvez espera la sentencia del secuestrado Tribunal Constitucional sobre "el caso Cocteles" para echar a la calle a los fiscales de Lava Jato y ponerse incondicionalmente a las órdenes de la coalición que gobierna el país. El peor fujimorismo está de vuelta. Esta vez, revuelto en acuñismo**

AMÉRICO ZAMBRANO

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, asegura en público que no moverá a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

En privado, sin embargo, transmite otro plan: esperar la inminente decisión del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de Keiko Fujimori para usar esa "derrota pública" como argumento y apartarlos de sus cargos.

A fines de agosto el TC celebró su última audiencia sobre la demanda que busca archivar definitivamente el proceso por lavado de activos contra la lidereza de Fuerza Popular. Los magistrados quedaron listos para votar si los aportes de campaña constituyen delito o si deben ser excluidos del tipo penal.

Según fuentes de la Fiscalía de la Nación consultadas por este semanario, Gálvez ha manifestado a su círculo más cercano que un fallo adverso a Pérez le dará la coartada perfecta para dismantelar al equipo que procesó a tres expresidentes y mantiene en el banquillo de los acusados a buena parte de la clase política.

El propio Gálvez no ha ocultado su animadversión hacia los fiscales que acusaron a la jefa de la bancada más poderosa del Congreso. Hace tres semanas declaró en radio "Exitosa" que, si llegaba a ocupar el

cargo más alto del Ministerio Público, lo primero que haría sería sacar a Vela y Pérez.

"Ponte que yo fuera fiscal, ni un minuto están esos señores ahí", adelantó Gálvez. "Yo los saco en el acto", aseguró.

El flamante Fiscal de la Nación los acusa de haber "cometido delitos que han encubierto a Odebrecht" y de ser "los mejores abogados" de la constructora brasileña de las coimas. La amenaza quedó registrada como una promesa de venganza contra los dos fiscales que lideran una de las investigaciones de corrupción más emblemáticas del país.

Ahora, en su versión interina, Gálvez ha ensayado un discurso distinto. Poco después de asumir la conducción del Ministerio Público, admitió que remover a Pérez en pleno inicio del juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán sería "impertinente y sobre todo irrazonable". Aseguró que ambos continuarían en sus puestos. "Tengo algunos criterios radicales, pero debo modificarlos para buscar consensos", declaró en RPP. Muy pocos le creyeron.

La aparente moderación, sin embargo, no ha convencido a quienes siguen de cerca las disputas en la Fiscalía. Las mismas fuentes aseguran que la espera no es un cambio de convicción sino una maniobra táctica: dejar que el TC cuestione la acusación de Pérez contra Keiko Fujimori para entonces justificar su salida, y con ella, la de su jefe, Rafael Vela. Al fin y al cabo, ese es

La Fiscalía ha sido tomada una vez más. Primero fue "Vane". Ahora es Tomás Aladino Gálvez, el fiscal que emergió del pantano de los "Cuellos Blancos".



también el objetivo de Fuerza Popular y de las bancadas que controlan el Congreso. La permanencia de Gálvez –y su tranquilidad– como Fiscal de la Nación interino depende de ellos.

La trama tiene los visos de un plan coordinado. Durante una de las últimas audiencias en el TC quedó en evidencia el talante de algunos de sus miembros. El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, por ejemplo, se dirigió al fiscal Pérez con la vehemencia de un abogado defensor del fujimorismo.

"En todas partes del mundo los partidos políticos reciben donaciones y, en el Perú, todos

los partidos recibían dinero de manera pitufada", afirmó. Y agregó que recién en 2019 se tipificó el financiamiento ilegal de partidos, por lo que –a su juicio– no cabría aplicar retroactivamente esa figura a Fujimori.

El contraste fue frontal: mientras Pérez insistía en que Odebrecht canalizó 1,2 millones de dólares de manera clandestina hacia Fuerza Popular burlando los controles antilavado, Gutiérrez replicaba que la candidata ya no era congresista y que no existía evidencia de una contraprestación. "¿Por qué no denuncia a todo el Congreso que votó a favor de la Interoceánica?", le

increpó a Pérez. Parecía el abogado personal de *madame K*.

Para el fiscal Pérez esa línea de razonamiento es la antesala de un derrumbe mayor. Si se cae el "caso Cocteles", también se desplomarán otros procesos de financiamiento político con dinero de Odebrecht: desde los 3 millones de dólares que recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia –ya condenados por lavado de activos– hasta los aportes ilegales a Susana Villarán, al Partido Aprista o a Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular. Un dominio judicial que amenaza con arrasar la columna vertebral del Lava Jato peruano.



José Luis Castillo Alva, una de las cabezas de los "Cuellos Blancos", tiene fuertes conexiones con Tomás Aladino Gálvez.



Tomás Gálvez y José Luis Castillo Alva, captados en el restaurante El Damero, en el centro de Lima. La cita se produjo el pasado 15 de agosto, cuando Gálvez ya despachaba nuevamente como fiscal supremo.



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Exp. N°00037-2023-1-5001-JS-PE-01

reexamen y el conocimiento de nuevos delitos como resultado de la ejecución del mandato judicial.

9.7 El máximo intérprete de la Constitución Política del Perú desarrolla exigencias o características que deben presentar las Injerencias a las comunicaciones y los documentos privados: **a)** que los casos de injerencias estén previstos en la ley; **b)** que la finalidad de las injerencias sea legítima; y **c)** que las injerencias sean idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. El artículo 2, inciso 10, del Texto Constitucional solamente admite un límite al derecho examinado, la intervención judicial, es la única que justifica el levantamiento del secreto y e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, por lo que corresponde examinar sus requisitos constitucionales y de legislación.

DÉCIMO. - ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

Las defensas de los afectados se opusieron al requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones planteado por la fiscalía, salvo la defensa Noguera Ramos quien se allanó a dicho requerimiento; este juzgado sobre la base de los elementos de convicción presentados, conforme al estado de la investigación preliminar en que nos encontramos, considera:

10.1 Se tiene que la fiscalía concretamente, en la disposición fiscal n°01 del 15/07/2022, formula tres imputaciones interrelacionadas entre sí cuando se atribuye a los investigados César José Hinostroza Pariachi, Ángel Henry Romero Díaz y Tomás Aladino Gálvez Villegas haber contactado a través de terceros a los miembros del ex CNM para ser favorecidos en las convocatorias N°001-2015-SN/CNM y N°002-2015-SN/CNM, los dos primeros para ocupar los cargos de jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República (concurso público para cubrir una plaza vacante como juez supremo), y el último como fiscal supremo en mérito al concurso público para cubrir dicha plaza cuyo

57



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Exp. N°00037-2023-1-5001-JS-PE-01

desarrollo por etapas se encuentra desarrollado en el oficio N°000643-2023-DSN/JNJ, que corre de fojas 92 a 99.

10.2 En el correlato de los elementos de convicción glosados por el Ministerio Público, funda su pedido, sobre la base de la declaración del testigo Impropio Willy Serrato Puse, quien de fojas 71 a 75, refiere conocer a los ex consejeros Iván Noguera Ramos y Guido Aguila Grados, al primero de ellos haberle prestado apoyo a solicitud de Humberto Acuña quien atendió el pedido de su hermano César Acuña Peralta para que apoye la candidatura de Noguera Ramos como representante de las universidades privadas, además con quien, de acuerdo a su declaración testimonial de fojas 76 a 78, reconoce (i) compartir la misma filiación política con Serrato Puse en las filas del partido Alianza por el Progreso, (ii) ser elegidos el año 2000, y (iii) ser nuevamente convocado para ser candidato al Congreso en el año 2010, vínculo que se prolongó hasta el 2018, como se advierte de la declaración de Francisco Ruiz Rojas conocido como "Panchito", -quien según la declaración testimonial de César Acuña era su apoyo personal para realizar sus gestiones financieras-, que en su declaración testimonial de fojas 79 a 81, acepta haber efectuado diversos depósitos de dinero a la cuenta bancaria de Serrato Puse por encargo de César Acuña Peralta; dichas sumas de dinero, según lo manifestado por Serrato Puse en su declaración del 31/07/2019, en parte, sirvieron para apoyar la campaña de elección del ex consejero Noguera Ramos, además de buscar los votos de los rectores de las universidades.

10.3 Sin embargo, la connotada presencia de Serrato Puse en la secuela de hechos analizados por la fiscalía tiene un significativo alcance, previo a las tratativas que sostiene la fiscalía se realizaron para seleccionar a los investigados Hinostroza Pariachi, Romero Díaz y Gálvez Villegas como integrantes titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público respectivamente; esa misma persona declaró haber prestado su apoyo a la elección de Guido Águila Grados a solicitud de Julio

58

Dos de las 70 páginas del expediente judicial donde aparece la declaración del testigo Willy Serrato, quien declaró que César Acuña entregó sumas de dinero para "apoyar" las candidaturas de los exintegrantes del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que eligieron a Tomás Gálvez como fiscal supremo.

Ese es el escenario ideal para Tomás Aladino Gálvez, advirtieron dos fuentes de la Fiscalía Suprema. Sería la llave para responsabilizar a Pérez y Vela del descalabro y justificar sus salidas del equipo. Con solo un movimiento, cumpliría la *vendetta* anunciada en

"Exitosa" y, al mismo tiempo, respondería a la expectativa del fujimorismo y de sus socios en el Parlamento que buscan desde hace años destruir al equipo Lava Jato.

La decisión del TC, prevista para los próximos días, no solo marcará el futuro judicial de

Fujimori, a pocas semanas del cierre de fórmulas y listas para las elecciones de 2026. Ese horizonte convierte también a Gálvez en la ficha que más celebran los actores políticos bajo sospecha.

Es lo más parecido a lo que ocurrió con la justicia durante

el gobierno de Alberto Fujimori. "Bajo la dictadura fujimorista de los años noventa, la obediencia del Ministerio Público fue absoluta. Figuras como Blanca Nélida Colán o Miguel Aljovín quizá creyeron que la ilegalidad de sus actos nunca sería sancionada. Sin

embargo, con el retorno de la democracia, fueron destituidos y procesados penalmente", señaló Pérez a esta revista. "La memoria de lo ocurrido en los noventa debe mantenerse viva, especialmente en la coyuntura actual. Es un recordatorio de que ningún Fiscal de la Nación -titular o interino- está exento de responsabilidad por sus actos", advirtió.

La Fiscalía ha sido tomada por la mafia una vez más, según coinciden diversos analistas y observadores. Primero fue Patricia Benavides, alias "Vane". Ahora es Tomás Aladino Gálvez, el fiscal que emergió de las sombras de los "Cuellos Blancos" y que regresa con el poder de decidir el rumbo de las investigaciones más incómodas del país.

Gálvez no solo responderá a un partido sino a varios. Entre sus vínculos se cuentan operadores de las bancadas que hoy sostienen el pacto con el gobierno y que, al mismo tiempo, han promovido la captura de las principales instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El primer vínculo incómodo de Tomás Gálvez es con el abogado José Luis Castillo Alva, investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias como parte del caso Cuellos Blancos.

Castillo Alva -defensor del exsecretario fujimorista Joaquín Ramírez y pieza clave en la red de favores de César Hinostroza- fue visto reunido en privado con Gálvez el pasado 15 de agosto en el restaurante "El Damero", en el Centro de Lima. La cita, denunciada de forma anónima ante el Ministerio Público, ocurrió cuando Gálvez ya ejercía nuevamente como fiscal supremo. El encuentro con un coinvestigado de Patricia Benavides y del propio caso Cuellos Blancos refuerza la sospecha de que el actual Fiscal de la Nación interino mantiene nexos con personajes que buscan neutralizar a quienes los investigan.

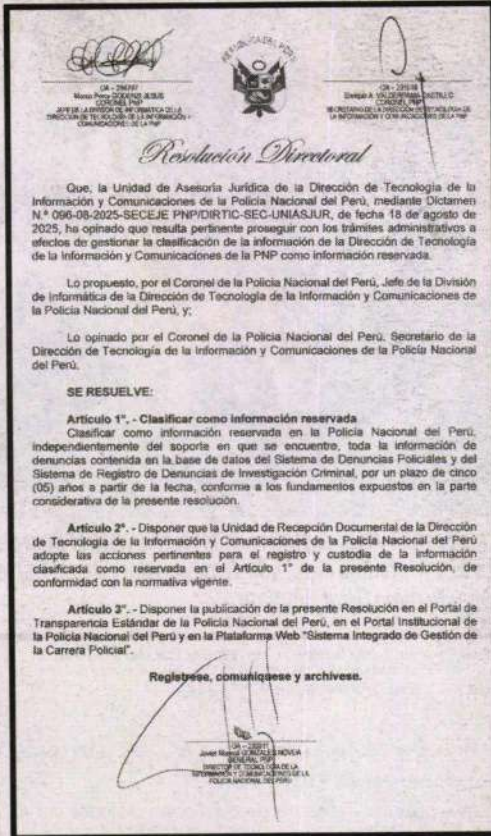
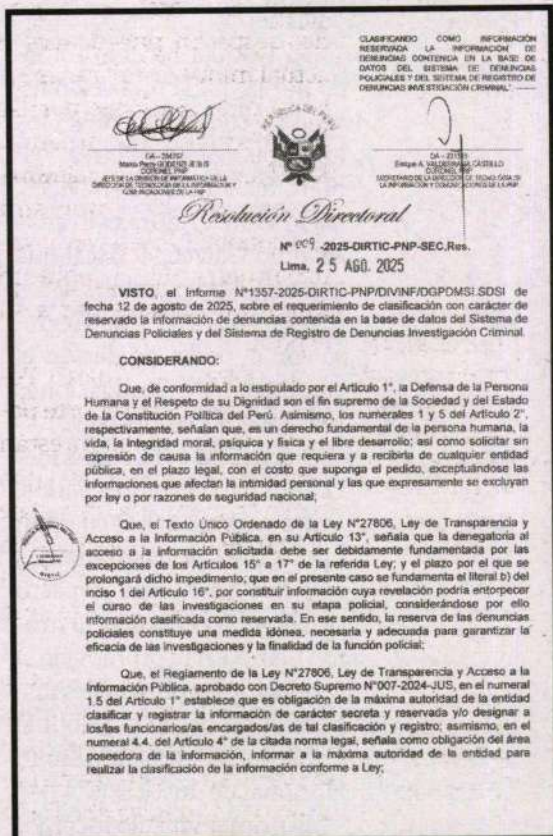
Esta red de amistades y lealtades -descrita en documentos judiciales y declaraciones de testigos- coloca al nuevo Fiscal de la Nación en el centro de un engranaje político más amplio del que se tiene idea.

Los documentos judiciales

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Policia secreta

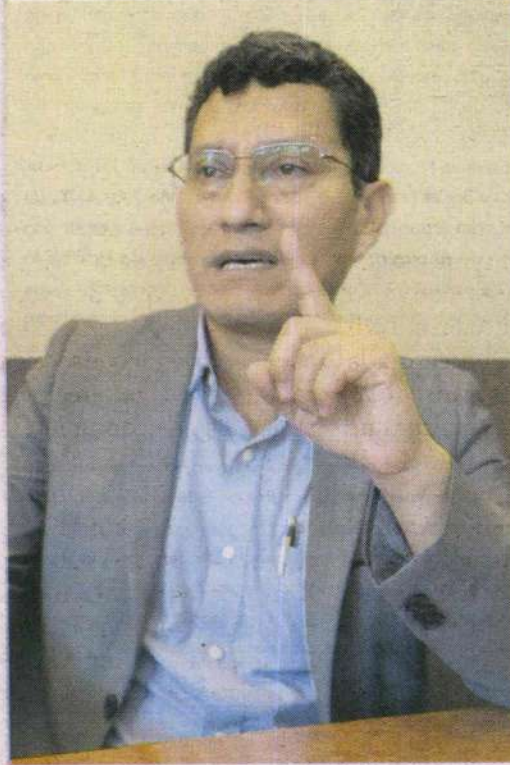
► Imitando al Congreso del hampa, la PNP decreta que las denuncias que lleguen a sus dependencias y comisarias serán "información reservada" y que su difusión se castigará con cárcel



La anticonstitucional resolución que emitió la Policía para vetar la publicación de cualquier denuncia planteada en su ámbito.



Comandante (r) PNP Francisco Rivadeneyra: "Si un periodista ahora publica una denuncia policial, la PNP podrá iniciar una investigación para averiguar quién es la fuente".



"No contar con acceso a esta base de datos es no tener estadísticas de la criminalidad", dice el coronel (r) Harvey Colchado.

RICARDO VELAZCO

Quince años de cárcel por publicar el reporte de una denuncia. En la Policía han decidido que se trata de "información reservada" y que airearla pone en

riesgo la seguridad nacional. La resolución de tres páginas publicada en agosto pasado tiene la horma de Juan José Santiváñez y la fragancia del Congreso del hampa.

La medida se aplica sin excepciones a todas las denuncias y los reportes registrados

en las bases de datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL) y del Sistema Integrado de Investigación Criminal (SIRDIC). Desde los delincuentes más avezados hasta los infractores de tránsito, pasando por los corruptos de turno, están, de

COMUNICADO

Información clasificada como **RESERVADA**
! **NO COMETA DELITO DE INFIDENCIA**

PERSONAL POLICIAL
(Artículo 70, 71, 72 - Código Penal Militar Policial)

PERSONAL CIVIL
(Constitución Política y Código Penal)

Leer RD N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC.Res del 25AGO2025

He leído y entendido la Resolución que clasifica como reservada la información del sistema SIDPOL/SIRDIC y acepto las disposiciones y responsabilidades del correcto uso de dichos sistemas. (click acá)

Sistema Desarrollado por DIVINF/DIRTIC PNP
Todos los derechos reservados © 2009
Versión 1.5.0

El mensaje amenazante que recibe todo policía cuando ingresa al Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL) y al Sistema Integrado de Investigación Criminal (SIRDIC).

ahora en adelante, protegidos por el silencio impuesto desde la Policía.

Desde hace un par de semanas, cuando un agente de la Policía ingresa a las bases de datos de SIDPOL y SIRDIC, se abre automáticamente una ventana en la pantalla de la computadora. El mensaje con letras en rojo advierte: "Comunicado. Información clasificada como RESERVADA. NO COMETA EL DELITO DE INFIDENCIA".

El mensaje también avisa de las penas carcelarias que contempla la ley por divulgar "información reservada". Si el que filtra la denuncia es un efectivo policial, podría recibir hasta diez años de cárcel. En el caso de los civiles la pena puede ser más alta. El delito por revelación de secretos nacionales tiene una pena de hasta 15 años de cárcel. Desde la institución arguyen que con esta medida quieren evitar "poner en riesgo" la tarea de "prevenir, investigar y combatir la

delincuencia". Por supuesto, es mentira. Lo que buscan es atemorizar al personal que todavía cree que se puede limpiar la institución, intimidar a la prensa y allanar el camino a los malandros que también candidatearán en las próximas elecciones. Con un solo tiro resulta una jugada a tres bandas.

"Si un periodista publica ahora una denuncia, la PNP podrá iniciar una investigación para averiguar quién es la fuente. Eso hará que muchos policías que comparten data desistan de esa idea", señala el comandante de la Policía en retiro Francisco Rivadeneyra.

"Eso es inconstitucional porque estamos hablando de denuncias. Es decir, hechos que la gente cuenta en las dependencias cuando todavía no hay una investigación abierta", dice Roberto Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Pereira advierte que "la resolu-



El jefe de la PNP, Víctor Zanabria, ha desenvainado la espada contra la libertad de prensa e información. Más siniestro que nunca.

ción tampoco explica en qué consistiría el daño que se le hace a la seguridad interna la revelación de esos datos”.

La resolución directoral la firmó el general Javier Gonzales Novoa, director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP. Fuentes de la Policía señalan que la decisión de sellar las bases de datos también responde al desprecio que el mandamás de la PNP, Víctor Zanabria, le tiene a la prensa.

El general Zanabria dejará el mando de la PNP el 1 de octubre próximo, pero se ha propuesto dejar su sello personal en la institución. Eligió para la jefatura de prensa de la institución al mayor Francisco Zea, un oficial que tampoco siente mucho aprecio por el periodismo.

El lunes pasado Zea escribió en las redes sociales: “Alguien le ha hecho creer a los periodistas que porque dicen ser prensa les cubre un manto

protector. Es decir, están en medio de una marcha con gente tirando piedras, fuego, palos y otras cosas, y el periodista quiere que el policía distinga quién es quién”.

Y hace dos semanas Zanabria ordenó reformar el Sistema de Gestión Documental de la PNP, la mesa de partes que recoge todos los documentos que entran y salen de la institución. “La orden es que a partir de ahora todos los documentos que estén en ese sistema tienen que estar digitalizados. Esto permitirá que los altos mandos puedan saber quién recibió documentos, quién los tramitó, quién los revisó y a dónde se enviaron. Los agentes a cargo del sistema sienten que su comando ha decidido espíarlos”, advierte una fuente policial. La medida, que debiera servir para transparentar el proceso de las investigaciones, termina siendo un arma de espionaje.

“La resolución que declara

secretas las denuncias no es un episodio aislado. Hay que entenderla en un contexto de deterioro generalizado de la libertad de prensa en el Perú y esto incluye el acceso a la información y la transparencia pública. En el *ranking* que elaboramos entre 180 países sobre las condiciones para el ejercicio del periodismo, el Perú ha descendido 53 posiciones. Ha pasado del puesto 77 en el 2022 al 130 este año. No es normal que un país baje tanto en tan poco tiempo. Y ese deterioro lo alimentan otros factores como las agresiones en las protestas y la campaña de estigmatización contra periodistas críticos como Gustavo Gorriti”, dice Artur Romeu, director de Reporteros sin Fronteras para América Latina.

“La resolución no se entiende fuera de un contexto en el que el Estado en general se sienta en la ley de Transparencia. Ahí está el Poder Ejecu-

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13



“Hay que entender la resolución en un contexto de deterioro generalizado de la libertad de prensa en el Perú”, dice Artur Romeu, director de Reporteros sin Fronteras para América Latina.

“La resolución es inconstitucional porque estamos hablando de denuncias, hechos por los que todavía no se ha abierto una investigación formal”, dice Roberto Pereira, abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

tivo que no transparenta las discusiones sobre el alza del sueldo de Dina Boluarte o el Congreso sacando una norma para que sus trabajadores no puedan hacer declaraciones. La PNP ha visto eso y se ha envalentonado”, dice Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

Las fuentes de la PNP aseguran que la medida apunta a las elecciones del 2026. El objetivo es evitar que se caigan candidaturas por airearse en los medios de comunicación denuncias policiales.

“Son muchos los funcionarios de este gobierno que tienen denuncias policiales. Esto se podría cotejar fácilmente. Y al mismo tiempo la disposición le permitirá a esta administración controlar la información que existe sobre sus adversarios”, señala el coronel (r) Harvey Colchado.

Hace un par de semanas esta revista reveló que Santiváñez tenía una denuncia policial por estafa al haber cobrado 12,000 soles por unos servicios legales que nunca brindó. El sistema también guarda otros reportes en los que el ministro aparece como abogado de discotecas que se burlaban del municipio al abrir

sin licencia de funcionamiento en Miraflores. Así lo demuestra un reporte de febrero del 2015 donde se le consigna como representante legal del local OM Disco, con clausura municipal.

No es el único ministro al que la disposición de la Policía le calza a la medida. En abril del 2024 “Panorama” reveló una denuncia contra César Sandoval, entonces asesor del despacho presidencial y actual ministro de Transportes y Comunicaciones, por dar puñetes y patadas a su pareja. ATV hizo pública una denuncia contra el entonces ministro de Economía José Salardi, que daba cuenta de un supuesto intento de estrangular a su esposa.

El dominical “Cuarto Poder” presentó un reporte policial –de esos que ahora están prohibidos de publicar– que ponía en evidencia un reglaje al hijo de la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Vidal La Rosa, por parte de la DIGIMIN.

Las denuncias policiales han sido la pesadilla de varios congresistas. En abril del 2022 esta revista reveló el parte policial de la fujimorista Tania Ramírez por meterse al bolso productos sin pagar en un supermercado. Otra denuncia expuso a un colega suyo de bancada, Héctor Ventura, por haber pateado a un policía a las afueras del Palacio Legislativo.

La base de datos del SIDPOL también atesora un parte de la congresista Kira Alcarraz donde se da cuenta de que tuvo un accidente cuando manejaba sin brevete. Y otro de Héctor Valer por patear a su hija. Fue esta denuncia la que provocó que Valer tuviera que renunciar al premierato cuatro días después de su designación.

De carambola, esta medida también servirá para manipular las cifras de la delincuencia y del crimen organizado. “No contar con acceso a esta información es no tener estadísticas. Eso deja al Observatorio de Seguridad Ciudadana a ciegas pues esas bases de datos ahora secretas contienen *data* sobre robos, homicidios y extorsiones”, advierte el coronel Colchado.

Para muchos de los aspirantes a ocupar cargos en el próximo gobierno es de vida o muerte que las denuncias policiales sean secretos de Estado. ■

Incapaces

► La codicia fronteriza con el delito pone en peligro el futuro de Machu Picchu y la mellada reputación turística del país se esparce por el mundo

ALONSO ZAMBRANO

Machu Picchu enfrenta una crisis sin precedentes. La ciudadela inca resiste jaqueada por la codicia de las mafias vinculadas al transporte, a los servicios turísticos, a la venta de entradas, a las autoridades corruptas y a un gobierno central al que lo único que le interesa es hacer caja. El resultado es el caos, miles de viajeros descontentos y la reputación turística del país en creciente deterioro.

El 13 de septiembre la organización internacional New7Wonders advirtió al Estado peruano que Machu Picchu corre el riesgo de perder su estatus de maravilla mundial. Dio cuenta de los sobrecostos en los pasajes, las irregularidades en la venta de boletos, las deficiencias en el transporte, los conflictos sociales recurrentes y las aglomeraciones que padecen los turistas, quienes pagan por un viaje de lujo y a cambio reciben unos servicios pésimos. La organización no dijo nada que las agencias de turismo no hayan advertido en los últimos tiempos.

La última crisis estalló la segunda semana de septiembre, cuando decenas de turistas peruanos y extranjeros quedaron varados en Aguas Calientes –el pueblo al pie de la ciudadela inca de Machu Picchu– debido a la falta de buses y a los bloqueos en las rutas de acceso hacia Cusco. Detrás del conflicto estaban dos empresas del transporte: Consettur, que lleva operando desde los tiempos de Fujimori y cuya concesión acababa de vencer, y San Antonio de Torontoy, la nueva empresa impulsada por las comunidades locales.

Una semana antes del paro, el 4 de septiembre, había vencido la concesión de Consettur, la compañía que tenía el monopolio del transporte de buses que cubre la ruta de Aguas Calientes a Machu Picchu. Pero



Ronald Vera, alcalde de la Municipalidad de Urubamba: es el mayor responsable de la última crisis.

la empresa que debía reemplazarla sufrió un sabotaje.

La empresa San Antonio de Torontoy fue creada en el 2016 y tiene como gerente general a Daniel Quispe Baca, presidente de la comunidad campesina de Tambomachay. Según registros públicos, tiene un capital total de S/ 1'054,000. El 11 de septiembre, tras obtener la adjudicación por parte de la Municipalidad de Urubamba, la empresa intentó llevar parte de su flota de 18 buses hacia Aguas Calientes remolcándolos en plataformas ferroviarias jaladas por



Video del 11 de septiembre muestra cómo un grupo de sabotadores coloca basura y desmante en la vía del tren que iba a remolcar los buses de San Antonio de Torontoy.

una locomotora. No pudo hacerlo porque les cortaron el cableado de frenos de las plataformas.

El contrato con la empresa también está marcado por los ataques mutuos y la poca transparencia. La Municipalidad Provincial de Urubamba, dirigida por el alcalde Ronald Vera, tuvo meses para licitar un nuevo concesionario, pero el proceso fue bloqueado por una acción de amparo presentada el pasado 25 de marzo por Consettur ante el Poder Judicial.

“Como no pudo licitar, el alcalde implementó un

plan de contingencia que entregó la operación por cuatro meses a la empresa San Antonio de Torontoy. El conflicto estalló porque un sector respalda a Consettur y otro a San Antonio de Torontoy”, explica la periodista cusqueña Yesica Choque. “Consettur no aceptó la adjudicación. Sus trabajadores fueron identificados arrojando basura sobre las plataformas que trasladaban los buses desde Hidroeléctrica. Había encapuchados que colocaban piedras en los rieles y luego aparecieron cortados los cables de

los trenes. Todo eso fue un sabotaje”, denuncia Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu.

En respuesta, los pobladores que respaldan a San Antonio de Torontoy bloquearon la vía desde Aguas Calientes hacia el santuario impidiendo las operaciones de los buses de Consettur. El resultado: la ruta Ollantaytambo-Aguas Calientes-Machu Picchu quedó paralizada en ambos sentidos.

“Consettur debía dejar la concesión el 4 de septiembre, pero usaron leguleyadas y su poder económico para alar-



Decenas de turistas quedaron varados en la estación Ollantaytambo sin poder ir a Machu Picchu. La imagen es del 16 de septiembre.



FOTO ARCHIVO

"Consettur ya no tiene concesión, no está habilitada, pero sigue operando con prepotencia", dice la consejera regional Luz Casafranca.



FOTO ARCHIVO

"El alcalde de Urubamba no condujo un proceso responsable ni transparente. Su improvisación generó este conflicto", advierte Carmen Luz Cornejo, de la Asociación Civil Asamblea Popular del Cusco.



FOTO JOEL DURÁN • H13

"Aquí lo que hay es una pugna privada por monopolizar el circuito hacia Machu Picchu", dice Alfredo Cornejo, presidente del Frente Regional de Defensa del Patrimonio y Turismo Sostenible (Fredertur).

garla. El alcalde de Urubamba, en vez de licitar, contrató a dedo a San Antonio de Torontoy. Aquí lo que hay es una pugna privada por monopolizar el circuito", afirma Alfredo Cornejo, presidente del Frente Regional de Defensa del Patrimonio y Turismo Sostenible (Fredertur).

El 20 de septiembre la PCM convocó a una mesa de diálogo con el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional del Cusco, las municipalidades de Urubamba y Aguas Calientes y las dos empresas enfrentadas. Se acordó que ambas operarían en simultá-

neo. En total, la ruta desde Aguas Calientes a Machu Picchu permite la operación de un máximo de 24 buses. Hasta ahora no se ha definido cuántos buses pondrá cada empresa ni cómo se repartirán a los turistas. De no imponerse el orden, las empresas terminarán peleándose turistas e imponiendo el caos en la pista.

El 17 de septiembre la Contraloría advirtió graves deficiencias en el plan de contingencia elaborado por la Municipalidad de Urubamba: no define cómo se venderán los boletos

para los buses ni si habrá alzas en las tarifas. Además, detectó que para que la ruta funcione de manera óptima se necesitan 24 buses operados en dos turnos. Es decir, 48 choferes disponibles. Pero el contrato de San Antonio de Torontoy no exige dos choferes por bus sino solo uno. Tampoco se le ha exigido tener talleres de mantenimiento.

"El alcalde de Urubamba no condujo un proceso responsable ni transparente. Su improvisación generó este conflicto", advierte Carmen Luz Cornejo, de la

Asociación Civil Asamblea Popular del Cusco.

"Este plan de contingencia es una salida coyuntural. Dura cuatro meses, pero una licitación sería tomará mucho más tiempo", señala la consejera regional Luz Casafranca.

"Consettur ya no tiene concesión, no está habilitada, pero sigue operando con prepotencia. Es el mismo patrón que con el hotel Sanctuary Lodge", agrega Casafranca.

"Si los conflictos continúan, el gobierno podría declarar a Machu Picchu 'activo crítico'. Eso impe-

diría huelgas y paros, pero militarizaría la zona. Y una zona militarizada espanta turistas. La cura sería peor que la enfermedad", dice Alfredo Cornejo, presidente del Fredertur y gerente de la agencia de viajes "Worldwide Exotic Adventures".

A la pelea por subir a los turistas a Machu Picchu se suma el conflicto por la venta de entradas, un asunto también dominado por mafias.

"Hoy hay un acaparamiento de entradas. En la web oficial nunca hay, pero sí en portales como Get Your Guide. Eso solo se explica por corrupción y permisividad del Ministerio de Cultura", acusa Cornejo. El empresario señala que, en promedio, el 60% de lo que paga un turista para transportarse hasta la ciudadela incaica se va en el pasaje del tren.

"Un turista peruano que va por cuenta propia debe tomar un tren desde Ollantaytambo a Machu Picchu que cuesta entre 15 y 20 soles. A los extranjeros el tren les cuesta por lo menos 140 dólares, porque no pueden ir en el tren local. Luego, en el bus desde Aguas Calientes hacia Machu Picchu los extranjeros pagan 24 dólares, mientras que los peruanos pagan 24 soles", detalla Cornejo.

"Las políticas comerciales de Perú Rail también han sido agresivas contra el turismo nacional y contra la población cusqueña. De todas las rutas, solo el 13% es para el tren local, con horarios inadecuados y sin derecho a reservas. El turista peruano está obligado a viajar de madrugada, pernoctar en Machu Picchu y regresar de noche", dice Carmen Cornejo, de la Asamblea Popular del Cusco.

Y cuando el turista llega por fin a la Ciudadela Inca lo que se encuentra es con una avalancha de visitantes. "Estamos al tope de la capacidad de carga establecida por la Unesco y por el plan maestro. Nunca se hizo un estudio riguroso para fijar límites por temporada. El Ministerio de Cultura creó cuatro circuitos, pero mal diseñados: unos demasiado cortos y otros excesivamente largos. Eso genera aglomeraciones y descontento en los visitantes", reconoce Luz Casafranca. Fin del viaje. ■

BRUNO AMORETTI

Dieciocho millones de soles les costaron a Repsol y a la naviera Fratelli librarse del juicio penal por derramar 11 mil barriles de crudo en el mar del Callao, el mayor desastre ecológico de la historia nacional. Para sacarle la vuelta al país contaron con la ayuda de un trío de funcionarios locales: el fiscal Ariel Tapia Gómez, que canjeó la acusación de delito doloso por una falta administrativa; el juez Jorge Silva Maslucan, que sobreseyó el expediente; y el procurador Julio César Guzmán Mendoza, quien, en lugar de defender al Estado, guardó riguroso silencio. La historia de Repsol y sus manchas de crudo, sin embargo, tendrá segunda parte.

El 29 de agosto Ariel Tapia, “el fiscal de Repsol”, fue expectorado del Ministerio Público. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los representantes de Repsol, administradora de la refinería La Pampilla, y los de Fratelli, la naviera dueña del buque *Mare Doricum* que provocó el derrame en enero de 2022.

Pocos días después el fiscal Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, apareció en un video institucional denunciando “inconsistencias” y “falta de sustento” en los acuerdos que firmó el fiscal Tapia con las empresas responsables del derrame.

Almanza advirtió también que los montos de las indemnizaciones son “insuficientes” y anunció que denunciará a Tapia por “celebrar ese acuerdo cuestionado”.

¿Qué fue lo que encendió las alarmas en el Ministerio Público? Que el mismo día que Tapia fue destituido, el juez de investigación preparatoria de Ventanilla, Jorge Silva Maslucan, resolviera validar dos acuerdos reparatorios: uno firmado con Repsol y el otro con Fratelli.

Los acuerdos se habían firmado en octubre de 2024. Lo más escandaloso es que en ellos las empresas no reconocen responsabilidad alguna. Se refieren al desastre como un “incidente”. Fratelli exigía además que, una vez aprobado el acuerdo, el buque *Mare Doricum* fuera liberado del puerto del Callao en un plazo máximo de tres días.

Tamara Gonzales Baldeón, nueva fiscal a cargo del caso del derrame de petróleo de Repsol: “Se puede advertir que aquí hay unos vacíos legales. No se puede considerar que en todos los delitos, por el solo hecho de pagar, ya no hay responsabilidad penal”.



Derramando lisura

► Un fiscal que cambió de opinión, un juez que sobreseyó el expediente y un procurador que guardó silencio son tres de los protagonistas del “arreglo” que favoreció a Repsol y a la naviera Fratelli después de que arrojaran al mar del Callao once mil barriles de petróleo

FOTO ANDINA



El crudo de Repsol cubrió más de once mil hectáreas del litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. Para la Fiscalía, sin embargo, todo se trató de un incidente desafortunado.



Exfiscal Ariel Tapia Gómez. Realizó una minuciosa investigación por dos años y medio contra Repsol y Fratelli. Tiró todo al tacho en octubre del 2024, cuando firmó los acuerdos.



Juez de investigación preparatoria de Ventanilla Jorge Silva Maslucan. No observó las irregularidades del fiscal Ariel Tapia. Por el contrario, validó los acuerdos y archivó el caso.



Julio Guzmán Mendoza, procurador del Ministerio del Ambiente. Mantuvo silencio ante la estrategia del fiscal Tapia de perdonar a los funcionarios de Repsol.

FOTO JOEL DURÁN • H13

FOTO JOEL DURÁN • H13

Repsol se comprometía a pagar 47 millones y medio de dólares como indemnización y Fratelli entregó la carta fianza de su buque, valorizada en USD 73,9 millones, como reparación civil.

La cereza del pastel fue la exigencia de los abogados de que se les aplicara el “principio de oportunidad”, una suerte de indulgencia laica que permite archivar un caso penal bajo ciertas condiciones, como el pago de una reparación civil. Para lograrlo el fiscal tenía que cambiar la acusación de “contaminación ambiental dolosa” a “culposa”.

El último paso era que el juez le diera luz verde al acuerdo. Y así fue. Acto seguido, Tapia desistió de pasar a un juicio oral y solicitó archivar el caso.

Toda la jugada se hizo ante el silencio del procurador. El defensor del Estado, cuyo único trabajo es abogar por los intereses del país y lograr la más alta sanción para los “responsables” del crimen medioambiental, calló durante dos años. Su papel fue decisivo para que se pudiera concretar la lavada de manos a precio de saldo.

La fiscal que reemplazó al exfiscal Tapia, Tamara Gonzales Baldeón, asegura que la decisión de su antecesor carece de sustento legal. “Si el delito compromete una grave afectación al interés público, no cabe aplicar el principio de oportunidad”, advierte Gonzales a esta publicación.

El crudo cubrió más de once mil hectáreas del litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. Se halló más de 1,850 animales silvestres



Henry Carhuatocto, director del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible: “El mensaje que nos están dando es que el que tiene plata puede contaminar. El precedente que se debería dejar es una lección más profunda, es dar una sanción ejemplar y dejar un mensaje claro para todas las empresas”.



Karina Garay, exfiscal en delitos medioambientales: “En un delito ambiental los daños son irreparables por más resarcimiento económico que se logre. Aquí veo una negligencia del Ministerio Público desde el principio”.

muertos, se afectó a miles de aves y especies marinas, se dejó sin sustento a centenares de pescadores y se contaminó más de 30 playas. Se trataba de un delito de “grave afectación al interés público”. Y la legislación vigente justamente impide aplicar el principio de oportunidad si se trata de un crimen medioambiental de “grave afectación al interés público”.

Para sacarle la vuelta al código penal, los abogados de Repsol y de Fratelli “convencieron” al fiscal de que “suprimiera” el alegato de interés público. Lo consiguieron y no les costó mucho. Pusieron sobre la mesa un “pago adi-

cional” de 9 millones de soles por cabeza, 18 en total, para gastar en presuntas obras en las zonas afectadas. El fiscal infringió la ley, el procurador siguió callando y el juez los bendijo.

“De acuerdo con la normativa, eso tampoco es posible. Se puede advertir que aquí hay unos vacíos legales. No se puede considerar que en todos los delitos por el solo hecho de pagar ya no hay responsabilidad penal”, afirma la fiscal Gonzales. Especialistas consultados para este reportaje coinciden con su posición.

“Para que se aplique el principio de oportunidad se debe reconocer responsabilidad

por el delito y en este caso eso tampoco ha ocurrido. Este mecanismo es común en casos pequeños, en delitos de bagatela, y tiene como ventaja que no apareces como condenado, es como si no hubiera pasado nada. Lo que han hecho es inventar una figura de suprimir el interés público para un caso gravísimo como el de Repsol. Aquí eso no existe y me parece increíble. Han prevaricado el fiscal y el juez que homologó este acuerdo”, afirma el abogado penalista David Acosta.

“En un delito ambiental, los daños son irreparables por más resarcimiento económico que se logre. Hay también una ética profesional ante todo.

Aquí veo una negligencia del Ministerio Público desde el principio”, sostiene Karina Garay, exfiscal en delitos medioambientales.

Para la fiscal Tamara Gonzales, el exfiscal Ariel Tapia actuó al margen de los procedimientos legales. Señala que nunca fundamentó ante el juez su decisión de cambiar la imputación por contaminación ambiental dolosa a culposa. El juez tampoco se lo exigió. Y el procurador lo avaló.

“En la última resolución judicial, en documentos previos y en las audiencias, no advierto que haya existido una motivación ni un control sobre este cambio”, afirma Gonzales.

El fiscal Tapia no siempre se jugó por Repsol. Durante dos años y medio realizó una minuciosa investigación. Puso en la diana a 16 funcionarios a los que imputaba el delito de contaminación ambiental doloso. Entre ellos figuraban siete gerentes y directivos de la refinería La Pampilla (propiedad de Repsol), el capitán del buque *Mare Doricum* y los operarios subcontratados por Repsol a cargo de la descarga de petróleo el día del derrame.

Durante la investigación Tapia recabó pericias, videos, audios, testimonios y cientos de documentos que desnudaban “malas prácticas en la prevención, operación y seguridad” en el buque y la refinería. También documentó “defectos en la fabricación y mantenimiento” de la infraestructura que trasladaba el crudo.

Acumuló pruebas de que Repsol demoró en activar el plan de emergencia ocasionando que la fuga de petróleo continuara por 20 horas. Y en los días siguientes la política de la empresa fue igual: “ocultó información y minimizó el daño ambiental”.

La imputación del fiscal Tapia incluía un agravante porque la transnacional entregó información falsa a las autoridades. La condena máxima que pudieron recibir los investigados era de 10 años de cárcel.

Pero algo se torció en el camino del fiscal en octubre del 2024. Tapia da carpetazo a dos años de trabajo y llega a un acuerdo con las empresas.

“El mensaje que nos están dando es que el que tiene plata

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Pulpo creciente

► Discretamente, el Grupo Coril ha llegado a las grandes ligas manejando una cartera de activos administrados que el año pasado llegó a los 23,352 millones de soles. Sada Goray y Wilfredo Ocorima crearon sendos fideicomisos bajo su nombre

ELOY MARCHÁN

Un remezón agitó la banca y el mercado bursátil local el 15 de septiembre. El banco Alfin, una entidad financiera "pequeña", comunicó a la SBS y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que iba a inyectar 1,874 millones de soles a su capital social. Se trata de un monto récord en el sistema financiero local. Siguiendo la pista del dinero, tropezamos con el Grupo Coril, socio mayoritario del banco. Es otro pulpo de los negocios que acaba de mostrar sus tentáculos.

Ese mismo lunes, en el diario "La República", aparecieron cuatro páginas de anuncios del Grupo Coril. El holding puso a remate 103 propiedades que la firma administraba a través de un fideicomiso. Los inmuebles tenían precios base que oscilaban entre los USD 11,000 y los USD 127,000. Todos están localizados dentro del emporio de Gamarra.

En el mundo de las inversiones el Grupo Coril no es un recién llegado. "Coril se ha convertido en un verdadero pulpo financiero. Está jugando en las grandes ligas", dice un analista financiero que pide la reserva de su identidad. En cuanto a la reputación, es "buena o mala" dependiendo de la fuente que uno consulte.

En los expedientes fiscales y en los círculos empresariales Coril está relacionado a los negocios de la empresaria Sada Goray, al manejo del dinero del "wayki" Wilfredo Ocorima, a los líos por la administración

de la "U" y Alianza Lima.

El grupo maneja también el fideicomiso de los edificios más caros del Centro de Lima y de San Isidro. Para la familia Miró Quesada resultó un salvavidas porque está detrás de la compra de "Amauta", la vieja e histórica imprenta de "El Comercio".

Coril se fundó en 1992 con



Eduardo Noriega Hoces, 69 años: el hombre detrás del Grupo Coril. Vive en Canadá y no da entrevistas.

el nombre de Corporación de Inversiones Latinoamericana. No parecía aspirar a las ligas mayores. Tenía como objetivo ser un agente de bolsa, un intermediario entre los inversionistas y las empresas que listan en bolsa. Su fundador fue Marcos Falcón Alfandari, gerente del extinto banco Progreso.

En el mundo de las finanzas a Coril lo conocen como "el banco de los judíos" debido a que buena parte de esa comunidad ha apostado por el grupo para invertir.

Actualmente, el accionista mayoritario del grupo es Eduardo Noriega Hoces, un empresario que sigue el estilo

Alfin Banco: una entidad financiera pequeña con resultados en rojo que acaba de recibir una inyección de capital de S/ 1,874 millones provenientes del Grupo Coril.



Venezolano Merbin Rangel Heredia, inversionista en criptomonedas y socio del Grupo Coril en Alfin Banco.

del "fantasma Ángel González", propietario de ATV. Noriega tampoco da entrevistas, solo hay una fotografía de él y vive en Canadá hace ocho años.

Coril cerró el 2024 manejando una cartera de inversiones de S/ 23,352 millones. Según especialistas, es de la envergadura de los grupos Romero e Intercorp. Hace una década, en el 2014, Coril manejaba una cartera de S/ 1,358 millones.

"La inyección de capital de 1,800 millones de soles al banco Alfin, uno de los negocios de Coril, ha dejado con la boca abierta a medio mundo. Estamos hablando de una in-



Sada Goray: clienta vip del Grupo Coril. Creó dos fideicomisos con Coril para sus proyectos Lima Bonita y Nuevo Chiclayo, ambos involucrados en el escándalo Marka Group.

yección de capital nunca vista en el Perú. ¿De dónde salió el dinero?", se pregunta una fuente del sistema financiero.

En documentos notariales a los que accedió este semanario solo hay rastro de un aporte de capital en efectivo de S/ 10 millones. Los S/ 1,864 millones restantes se justifican en "venta de acciones". Cuatro analistas financieros consultados para este informe califican de "rara" la capitalización. Y fuentes de la SBS reconocen que están "estudiando" la transacción.

Para este informe buscamos entrevistar a un vocero



Wilfredo Ocorima: el "wayki" creó en el 2022 con Coril un fideicomiso para poner a salvo su negocio de casinos que operan bajo la empresa Inversiones Mega Gaming SAC.

de Coril, pero durante dos días nadie respondió las llamadas ni los mensajes. Al cierre de esta edición, un empleado de la compañía se comunicó con este semanario y prometió facilitar la reunión, pero nunca se dio.

Alfin es el ex Banco Azteca, que en el 2021 fue comprado por un grupo de inversionistas peruanos liderados por la familia Wiese. Luego cambió de manos. Adquirieron las acciones tres empresarios: Martín Montoya Marcilla, Sebastián Salem Sambuceti y el venezolano Merbin Rangel Heredia. Entre los tres hicieron una



alfin nuestro banco

Santiago de Surco, 15 de setiembre de 2025.

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.

Asunto: Hecho de Importancia

Referencia: Se comunica inscripción de Aumento de Capital en Registros Públicos

De nuestra consideración:

De forma previa hacemos referencia a nuestras comunicaciones del 23 de diciembre del 2024, 28 de abril, 23 de junio y 26 de junio del 2025 mediante el cual se informó la aprobación del aumento de capital de la Sociedad hasta por la suma de S/. 1,874,648,865.00 (mil ochocientos setenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco y cinco/100 Soles) considerando un aporte en efectivo de S/ 10,000,000.00 (Diez millones y 00/100 Soles) y emitir, en consecuencia, 1,623,211,176 (mil seiscientos veintitrés millones doscientos once mil ciento setenta y seis) acciones clase A y 251,437,689 (doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve) acciones clase B, por un precio de colocación de S/ 0.005334332304413 cada una.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus normas modificatorias, el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01 y el oficio N° 4586-2025-SMV/11.1 que nos solicita mantenerlos informados sobre el aumento de capital, comunicamos como hecho de importancia lo siguiente:

- Cumplimos con remitir las Escrituras Públicas de Aumento de Capital y Modificación de Estatuto y su aclaratoria junto con su correspondiente anotación de inscripción.
- De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre Fecha de Corte, Registro y Entrega (Resolución CONASEV N° 069-2006-EF/94.10), se informa que el 23/09/2025 será la fecha en que se hará entrega de las nuevas acciones emitidas: 1,623,211,176 acciones clase A y 251,437,689 acciones clase B, a través de CAVALI S.A.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

ROSEMARY JUDITH AVELLANEDA ANTON
REPRESENTANTE BURSÁTIL
ALFIN BANCO

Firmado Digitalmente por:
ROSEMARY JUDITH AVELLANEDA ANTON
Fecha: 15/09/2025 07:43:20 p.m.

Comunicación de Alfin Banco enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores informando del aumento de su capital en S/ 1,874 millones. Detrás de la transacción está el Grupo Coril.

sunarp Sistema Nacional de Registros

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 1271616

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
INVERSIONES CORIL SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
INVERSIONES CORIL S.A.**

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00020

OTORGAMIENTO DE PODER-
POR JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° 03-2019 DEL 28/03/2019 SE APROBO:

1. LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PRIVADO DENOMINADO "FONDO BLANQUIAZUL - FONDO PRIVADO", EL CUAL TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE (15) AÑOS UN PATRIMONIO MÁXIMO DE US\$ 15'000,000.00 (QUINCE MILLONES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), ENCONTRÁNDOSE REGULADO POR SU REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CUYAS CUOTAS SE COLOCARÁN MEDIANTE OFERTA PRIVADA, POR LO QUE NO SE ENCONTRARÁ SUPERVISADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.

(...)

4. QUE LOS APODERADOS CLASE A Y CLASE B DE LA SOCIEDAD (INVERSIONES CORIL SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.) SEAN LOS APODERADOS DEL FONDO PRIVADO DENOMINADO "FONDO BLANQUIAZUL - FONDO PRIVADO", EN MERITO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ADMINISTRACIÓN QUE MANEJA LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL PODRAN EJERCER LAS FACULTADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS, ASÍ COMO LAS DE REPRESENTACIÓN, CONFORME AL ESTATUTO Y ESCALA DE PODERES DE LA SOCIEDAD EN REPRESENTACIÓN DEL FONDO PRIVADO DENOMINADO "FONDO BLANQUIAZUL - FONDO PRIVADO", ASÍ TENEMOS QUE LOS SEÑORES JORGE LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 07841006, ROGER EDUARDO VELASCO BOTETANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 08396745, ENRIQUE OSHIRO MIYASATO, IDENTIFICADO CON DNI N° 09534600, JORGE EDUARDO CASTILLO NÚÑEZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 4574889, RENZO EDGAR LOAYZA ROMÁN, IDENTIFICADO CON DNI N° 42204094 Y LA SRTA. CARMEN MALCA ROJAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44736557 ASÍ COMO LOS DEMÁS QUE EN UN FUTURO SEAN DESIGNADOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 12716516 DEL REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, EJERCERAN LAS FACULTADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS, ASÍ COMO LAS DE REPRESENTACIÓN, CONFORME AL ESTATUTO Y ESCALA DE PODERES DE LA SOCIEDAD EN REPRESENTACIÓN DEL FONDO PRIVADO DENOMINADO "FONDO BLANQUIAZUL - FONDO PRIVADO".

ASÍ TAMBIÉN SE APROBÓ DESIGNAR A LOS SEÑORES: ANTONIO EDUARDO ARMEJO SÁNCHEZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 07771089, FERNANDO FARAH GIHA, IDENTIFICADO CON DNI N° 07244552, CESAR FERNANDO TORRES CARRILLO, IDENTIFICADO CON DNI N° 09229764, SALOMÓN LERNER GRITIS, IDENTIFICADO CON DNI N° 08205476, JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, IDENTIFICADO CON DNI N° 10812168 PARA QUE EJERCERAN FACULTADES ESPECÍFICAS DENTRO DEL FONDO PRIVADO DENOMINADO "FONDO BLANQUIAZUL - FONDO PRIVADO", TALES COMO: REPRESENTAR AL FONDO ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, ANTE SUNAT, POLICIALES Y MILITARES CON LA FACULTAD DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS, REPRESENTAR AL FONDO ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE OTORQUE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES U OTROS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO. ESTA FACULTAD SE EXTIENDE A TODAS LAS GESTIONES.

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Partida registral de creación del Fondo Blanquiazul, que tiene el control del club Alianza Lima. El monto es de USD 15 millones y detrás está el Grupo Coril.

chancha de S/ 54 millones y obtuvieron la mayoría del accionariado.

Salem es un excampeón de golf conocido por ser la pareja de Sada Goray. Ambos están involucrados en el escándalo Marka Group y el pago de coimas en la gestión de Pedro Castillo. Montoya era testigo del caso "Marka Group" porque le prestó a Goray USD 250 mil para sobornar a funcionarios. Falleció en junio último a los 33 años. No se han revelado las causas del deceso.

Merbin Rangel es dueño de Banexcoin, una plataforma de venta de criptomonedas. A fines del 2022 Coril ingresó como accionista del banco Alfin inyectando USD 80 millones y se hizo del control de la entidad. Montoya y Salem fueron licuados financieramente, mientras que el venezolano Rangel todavía tiene un 5% de participación.

Alfin no se caracteriza por su rentabilidad. En el 2020 tuvo pérdidas por S/ 52 millones y en el 2021 por 125 millones. En el 2023 el saldo fue positivo en S/ 214 mil. El año 2024 le fue un poco mejor: el saldo en azul fue por S/ 1,3 millones. En el primer semestre de este 2025 la utilidad del



banco fue de S/ 4 millones, un nivel modesto si tenemos en cuenta los más de 1,800 millones de soles que le acaba de inyectar Coril.

El Grupo Coril, además de agente de bolsa, hoy es una administradora de fondos de inversión, una sociedad titulizadora y un manager de fideicomisos de todo tipo. Para Carlos Rojas, gerente de Capia Safi, Coril tiene el paquete completo del negocio de

inversiones. Compite mano a mano con el BCP, Scotiabank o BBVA. Rojas explica que se hizo conocida en el mundo bursátil por "desarrollar una cartera de personas de alto patrimonio".

Por ser agentes de bolsa, Coril gana en promedio 1% por transacción. Pero esta faceta de *brokers* no le genera mayor rentabilidad porque la Bolsa de Valores de Lima mueve poca plata.

El billete de Coril está en la administración de fondos. Tiene actualmente 61 fondos de inversión vigentes, un número récord. Solo para comparar, Enfoca, de Jesús Zamora, maneja cuatro fondos. En el Perú la chilena Larraín Vial maneja cinco.

A través de sus fondos, Coril reúne capital de inversionistas y financia proyectos inmobiliarios, energéticos y la compra de empresas. La ren-

tabilidad de la inversión es 12% anual, por encima de la oferta de los bancos. Muchos se preguntan cuál es el secreto de Coril.

"Mientras 31 cooperativas han sido intervenidas por la SBS y varias administradoras de fondos, como Blanco SAB, han caído en desgracia, Coril tiene un negocio boyante. Quizá la explicación está en que es un grupo que tiene varias razones sociales y en su destreza financiera", dice el analista económico Rafael Hidalgo.

En mayo pasado "El Comercio" vendió Amauta, su negocio de imprenta, a Premium Estate Corporation SAC, que había sido creada solo dos meses antes con un capital de 500 soles. Luego de la transacción, el presidente del Directorio, Luis Miró Quesada Villarán, tuvo que informar a sus socios que detrás de la compradora estaban tres integrantes de la familia -de la rama de los Rodríguez Larraín Miró Quesada- que operaron a escondidas junto a Grupo Coril.

Y también mete goles en la cancha. En el 2019 Coril creó, con USD 15 millones, el "Fondo Blanquiazul", compró acreencias del club y se hizo

Galería de Gamarra donde la mayoría de sus tiendas son parte de un fideicomiso del Grupo Coril. El lunes pasado 130 locales comerciales ubicados en el inmueble fueron puestos en remate.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea.

Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.



Dona aquí con Yape

975 525 500

El genocidio de Silicon Valley



DANIEL ESPINOSA

El 7 de noviembre de 2023, cuando Israel ya llevaba un mes aplanando Gaza y expertos en derecho internacional como Raz Segal advertían que nos encontrábamos ante el inicio de un “genocidio de manual”, un importante laboratorio de ideas con sede en Jerusalén observó que el éxito del régimen Netanyahu dependería en gran medida de sus tratos con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

El análisis del Israel Democracy Institute señalaba que compañías como Google, Microsoft, Amazon o Meta ostentan “una influencia significativa sobre la percepción de la realidad, la opinión pública, el escenario político y hasta las estructuras sociales”. Sus recomendaciones llamaban a ejercer mayor control sobre las plataformas digitales, pues una alegada proliferación de ideas “antioccidentales” estaba produciendo el surgimiento de un vigoroso movimiento pro-palestino en los campus universitarios de EE. UU.

Un mes antes, en octubre de 2023, Google ya había salido al rescate del ejército israelí cuando su “nube” informática se había sobrecargado debido al ataque de Hamás y a la consiguiente respuesta militar, que requirió y sigue requiriendo el uso de enormes bases de datos. Google ya prestaba servicios al proyecto sionista en el marco del “Proyecto Nimbus”, iniciado en 2021 con la colaboración de Amazon.

Aunque el proyecto en cuestión generó protestas al interior de la compañía dueña del buscador de internet más popular del mundo desde el año señalado, el comienzo del genocidio suscitó una radicalización de las manifestaciones. “No Tech for Apartheid”, una organización de trabajadores de Google y Amazon creada para acabar con la complicidad entre sus empleados y el régimen Netanyahu, encabezaría las protestas. En respuesta, Google despidió a cincuenta en abril de 2024.

La empresa tecnológica ya se había justificado asegurando que “Nimbus”, negocio de doce mil millones de dóla-

res, no tenía ninguna relevancia militar. Sin embargo, en julio de 2024 –poco después de los despidos– la revista “Wired” sacó un reportaje en el que se demostraba que, en realidad, el proyecto que Google y Amazon tenían con el Gobierno israelí ostentaba una relevancia militar fundamental.

“Cosas fenomenales están sucediendo en batalla debido a la nube pública de Nimbus, cosas que impactan en la victoria”, celebraría una vocera del ejército israelí en una conferencia tecnológica a la que “Wired” pudo acceder. ¿Qué “cosas fenomenales” estaba facilitando el “Proyecto Nimbus”? Difícil saberlo,



La maquinaria genocida de Netanyahu pasa al mundo de las gigantes tecnológicas.

pues Israel solo está teniendo éxito en su genocidio y limpieza étnica de Gaza, no en sus presuntos objetivos militares.

Eso de proveer almacenamiento de información en la “nube” puede sonar inofensivo, pero lo cierto es que Google y Amazon no solo proveen espacio para datos, sino también las herramientas más sofisticadas para su procesamiento y análisis. Esa es la clave. En términos tecnológicos, Silicon Valley provee el “músculo” que el ejército israelí necesita para poner en funcionamiento aplicaciones de inteligencia artificial de última generación como “Lavender”, usada para designar blancos para el asesinato en Gaza.

El rol de gigantes tecnológicos como Google o Meta en el genocidio ha consistido, asimismo, en censurar voces críticas en redes sociales, mientras las versiones oficiales y la propaganda de Israel y sus cómplices occidentales se amplifican. En junio de este año, por ejemplo, Israel le pagó a Google cuarenta y cinco millones de dólares para que difundiera sus mensajes oficiales –la “has-

bara”–, que se transmiten en la forma de anuncios que aparecen primeros en los resultados de las búsquedas.

En principio, esos anuncios pagados se usaron para negar que Gaza estuviera siendo sometida a una hambruna provocada, para lo cual fue necesario presentar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) –que venía exponiendo la extensión del hambre y el comienzo de las muertes por inanición– como infiltrada y controlada por Hamás.

En estos días, los mismos anuncios pagados se están enfocando en presentar a los miembros de la flotilla Global Sumud –que navegan hacia Gaza mientras se escriben estas líneas– como miembros encubiertos o colaboradores de la misma facción islamista gazatí, es decir, como terroristas. Lo pavoroso del asunto es que estos intentos de socavar la reputación de estos valientes activistas muy probablemente constituyan la antesala de una intervención violenta sobre la flotilla.

Según el especialista australiano Anthony Loewestein, lo que los gigantes tecnológicos están vendiendo no es solo la tecnología de punta que Israel necesita para la represión, la vigilancia y el asesinato masivo –“avances” que se están probando por primera vez en lo que Loewestein bautizó como el “laboratorio gazatí”–, sino la idea de que una nación puede hacer lo que Israel les está haciendo a los palestinos y salirse con la suya.

Pero, para Google, Amazon y Microsoft, asistir a Israel en sus políticas de limpieza étnica y *apartheid* va más allá del mero negocio: existe una coincidencia ideológica entre los pesos pesados de Silicon Valley y la élite política israelí. Hace unos días, cuando Naciones Unidas se unió al coro de denunciantes del genocidio, Sergei Brin –uno de los fundadores de Google– salió a decir que eso hacía a la organización “transparentemente antisemita”.

Los dueños de las grandes plataformas digitales yanquis –uña y mugre con el Pentágono y la National Security Agency, como le reveló al mundo Edward Snowden– entienden cómo funciona el sistema político-económico occidental: saben que las matanzas, la segregación, la creación de reductos de mano de obra semiesclava, los cambios de régimen y, eventualmente, genocidios como el gazatí, pueden resultar “males necesarios” en el proceso de “abrir mercados”.

La colaboración entre Silicon Valley y el *apartheid* israelí ha marcado un hito en la historia de la humanidad: estamos ante el primer genocidio en el que la inteligencia artificial, verdugo insensible y preciso, decide a quién se asesinará.

PARA GOOGLE, AMAZON Y MICROSOFT, ASISTIR A ISRAEL EN SUS POLÍTICAS DE LIMPIEZA ÉTNICA Y APARTHEID VA MÁS ALLÁ DEL MERO NEGOCIO

Lo que no se dijo en PERÚMIN



PEDRO FRANCKE

Esta semana se reunió PERÚMIN, la gran convención minera anual. Se ha desarrollado cuando la oligarquía peruana y su gobierno mafioso han blindado a sus grandes empresas mineras e impiden cualquier discusión sobre las sobreganancias que se llevan, la contaminación que dejan y los abusos que cometen. Es así que han ocultado el reporte que el Banco Mundial ha sacado la semana pasada con fuertes críticas a la situación de la minería latinoamericana. El Banco Mundial no es para nada izquierdista y desde que se fundó siempre ha tenido

para las comunidades locales. La expansión o intensificación de las actividades mineras pueden exacerbar los conflictos socioambientales existentes y acentuar la desigualdad de género. Estos conflictos pueden surgir debido a la carga que las actividades adicionales suponen para las comunidades locales, la participación a menudo limitada de estas comunidades en la toma de decisiones, la disponibilidad y accesibilidad parcial de la información, y las deficiencias de los mecanismos de distribución de los beneficios con dichas comunidades". Una buena síntesis de lo que pasa en el Perú.

LA MINERÍA Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

"La falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. En las minas de cobre y litio, estos efectos pueden aparecer en áreas mineras industriales, campamentos, vertederos y estanques de relaves. La minería a cielo abierto puede dañar directamente el suelo y la vegetación superficiales. Muchos lugares mineros, como los ubicados en los Andes, se caracterizan por geografías accidentadas que limitan la superficie de tierra disponible para la eliminación segura de los relaves". Como sucede en el río Rímac, donde tenemos los relaves de Tamboraque amenazando el agua de Lima.

AGOTAMOS CAPITAL NATURAL MIENTRAS FALTA INNOVACIÓN

"Durante demasiado tiempo, [América Latina] ha crecido agotando su capital natural en lugar de invertir en la tecnología y las prácticas productivas que podrían haber mejorado la eficiencia general y protegido sus riquezas. Según el análisis, es la región con la calificación más baja del mundo en eficiencia económica en el uso de la tierra", dice el informe. Aun así, el bloque oligárquico en el poder se resiste a cualquier reforma.

"Se desaprovecharon oportunidades para realizar mejoras e innovaciones tecnológicas. Como resultado, América Latina cuenta con sistemas de innovación deficientes y sus exportaciones están dominadas por productos primarios sin procesar", añade el documento. Nítida la crítica del Banco Mundial a seguir exportando piedras.

INDUSTRIALIZAR NUESTROS MINERALES

"La creciente demanda mundial de los abundantes minerales de la región que son necesarios para la transición energética creará oportunidades para agregar más valor en los mercados regionales y mundiales y para desarrollar productos derivados como las baterías.

Algunos países de América Latina están definiendo políticas para respaldar la adición de valor en las etapas posteriores. Las empresas extranjeras están invirtiendo cada vez más en industrias transformadoras. Por ejemplo, en agosto de 2023 la empresa china BYD, uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, anunció una inversión de USD 290 millones para construir una fábrica de cátodos de litio en Chile. Asimismo, anunció planes para integrar plenamente su cadena de suministro de vehículos eléctricos en Brasil, lo que incluye el procesamiento, la producción de baterías y la fabricación de automóviles. En México, CATL (empresa china de baterías) planea invertir en una planta de baterías para vehículos eléctricos". Frente a esto, el bloque oligárquico en el poder y sus ideólogos neoliberales no escuchan, no ven, no hablan.

PROVEEDORES MINEROS, OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

Otra forma de avanzar en industrializarnos es producir los insumos, equipos y servicios que necesita la minería. "La región no ha tenido un desempeño satisfactorio en la creación de un conglomerado productivo de empresas con uso intensivo de conocimientos prestadoras de servicios a grandes corporaciones multinacionales, como lo han hecho otros países con fuerte presencia minera, como Australia y Canadá. Las grandes empresas no se han comprometido con la innovación conjunta con proveedores locales, con excepción de empresas de Chile y, en menor medida, Brasil y Perú. Las innovaciones locales son poco frecuentes y están en manos de unas pocas empresas". Añade que Chile tiene una política estatal al respecto con una Mesa de proveedores mineros y la "Corporación Alta Ley", que promueve un ecosistema de proveedores de bienes y servicios especializados. Durante mi gestión en el MEF instalamos una Mesa Ejecutiva de Proveedores Mineros para conectar industria y minería, pero apenas salí del cargo la paralizaron.

UNA VISIÓN ALTERNATIVA

¿Cuál es la mirada de conjunto del Banco Mundial? "Esa abundante riqueza natural no es una solución mágica para lograr el desarrollo. Los Gobiernos deben elaborar un conjunto integral de políticas que transformen el modelo heredado, impulsado por los recursos naturales, en un modelo impulsado por la eficiencia ambiental y de los recursos y una mayor capacidad productiva y de innovación". Como vemos, hasta el Banco Mundial plantea cambiar de modelo. Pero por estas latitudes eso sigue siendo anatema para una oligarquía empeñada en organizar una CADE ultraderechista.



Jimena Sologuren, presidenta de Perúmin, inaugurando la convención en Arequipa.

un presidente impuesto por los Estados Unidos. Acá reseñamos, citando sus mejores frases, este informe que desde su título resalta la ausencia de una "gestión inteligente de nuestros recursos naturales".

LA MINERÍA A MENUDO AFECTA A INDÍGENAS Y VULNERABLES

"El modelo de desarrollo de América Latina, impulsado por los recursos naturales, a menudo ha comprometido a las comunidades indígenas y a las poblaciones vulnerables. No solo se podría proteger mejor a estas comunidades, sino que la inclusión podría incluso ser económicamente deseable para la región." ¡Clarísimo llamado de atención!

Insiste el Banco Mundial: "Sin protección institucional ni mecanismos de aplicación sólidos, la expansión o intensificación de las actividades mineras podría suponer varios riesgos

NÍTIDA LA CRÍTICA DEL BANCO MUNDIAL A SEGUIR EXPORTANDO PIEDRAS

Escuadrones y ladrones



JUAN MANUEL ROBLES

En un país en que la “mano dura” va sonando como idea recurrente de los candidatos cómicos de la derecha (y no hablo solo de Carlos Álvarez), ha vuelto a mencionarse, en estos días, una de las historias de escuadrones de la muerte más espeluznantes jamás oídas, en una tierra llena de historias espeluznantes de escuadrones asesinos. Y ojo, no es un caso que ocurra durante el conflicto armado, con militares paranoicos que combinaron mal el exceso de miedo, la sobreabundancia de armas y los “días malos”. Es más reciente; transcurre en los primeros años de la década de 2010, y tiene de protagonistas a policías aparentemente convencionales, con panza, sin mayor experiencia en masacres.

El caso empieza como las fábulas clásicas de justicieros y vigilantes. Corre el año 2012. En medio del aumento del crimen en Piura, un grupo de policías, liderados por Raúl Prado Ravines, decide actuar a su modo y con sus propias reglas. Empiezan a perseguir a cabecillas de bandas de secuestradores y extorsionadores. No está clara la efectividad de esta primera etapa, aunque ciertamente la fama positiva del escuadrón se expande, también la romantización de su trabajo y su estilo peculiar. Lo que sí está más detallado es lo que pasó no mucho después: decadencia del grupo, su envilecimiento, en un giro tan horroroso como clásico en estos casos.

En algún momento, estos policías dejan de lado su presunta razón de ser —el aniquilamiento selectivo en pos de una justicia más rápida— y empiezan a ser, digamos, productores de contenido. Hacen ya no operativos sino montajes de operativos. Sus puestas en escena son ambiciosas: incluyen gente que muere de verdad. Son incursiones confusas: las víctimas son supuestos delincuentes, pero los efectivos no dan información sobre los casos a la

Fiscalía, que siempre tiene que empezar de cero al hacer sus pesquisas.

Pronto se conoce su *modus operandi*: miembros del grupo se infiltran entre delincuentes de poca monta y les dan información para planear robos, secuestros o asaltos. Se citan con ellos. El día del presunto plan, los matan a balazos. Luego manipu-

la madeja.

En 2022, luego de un juicio largo en que se determinó la existencia del escuadrón y sus crímenes, Prado fue sentenciado a 35 años de prisión por solo algunos de los asesinatos de los que, según la investigación, es responsable. No estuvo en la sentencia, se había fugado tiempo atrás. Permaneció prófugo hasta junio de este año, cuando fue capturado y preso.

Pero aparentemente Raúl Prado Ravines nunca dejó de tener amigos poderosos, gente que le mostró solidaridad y brindó apoyo. Juan José Santiváñez, cuestionado hombre fuerte del régimen de Dina, no solo es amigo de Prado: fue su abogado. Ha dicho que la acusación en su contra es “una mentira”, un

complot caviar. Cuando fue ministro del Interior, defendió a los policías condenados frente al Congreso y dispuso 50 mil soles de su despacho para la defensa legal del excomandante PNP. Lo interesante es que en ese momento Prado seguía prófugo y el propio Estado ofrecía una recompensa de 100 mil soles por información sobre él.

La segunda sala de apelaciones acaba de anular el juicio contra los policías del escuadrón —entre ellos Prado Ravines—, por presuntas irregularidades. Santiváñez, hoy ministro de Justicia, celebra en público y repite que todo fue una conjura

caviar. Fernando Rospigliosi —ese gusano arrugado cuya función es articular ideas para Fuerza Popular— ha llamado prevaricadores a los jueces responsables de condenar al escuadrón. En las redes sociales, no faltan quienes sin saber nada del tema festejan. No son pocos a quienes la frase “escuadrón de la muerte” les produce un orgasmo.

A veces me gusta compartir el sueño extremista de que surjan vigilantes, comandos, escuadrones. Alguien que tome acción, que se encargue, que llegue a toda velocidad levantando polvo. Es algo natural; por eso nos gusta Batman. A veces casi estoy de acuerdo. El problema es que veo a los candidatos presidenciales, sus juntas, sus apoyos a redes de corrupción, su cinismo y tendencia a la mentira, y sé que su mano dura se parecerá más a la de este escuadrón de farsantes. Que esa mano dura, esa promesa de limpieza, será una excusa para poder jugar con la muerte, convertirla en espectáculo de “triumfo”, con libretos y montajes a medida.



Matar era su divisa



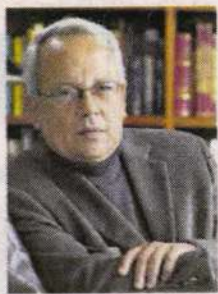
Una de las varias notas que este semanario publicó en relación con el escuadrón de la muerte de Prado Ravines.

lan la escena del crimen para hacer que parezca un combate. La prensa, que repite los partes policiales, dirá que los avezados delincuentes fueron abatidos. La televisión mostrará imágenes proporcionadas por las cámaras de la PNP.

El juego se vuelve perverso. Entre operativo y operativo, el escuadrón mata a 32 personas.

El móvil deja de ser cualquier cosa parecida a un asunto de seguridad, el aniquilamiento terrible pero “necesario”. Según la acusación fiscal que se abrirá después, el grupo sistematiza operativos falsos, con armas de fuego y disparos, para fingir heroicidad —con riesgo de vida— y garantizar premios y ascensos, una especie de versión norteña de los falsos positivos de Álvaro Uribe (el Fujimori colombiano). La suerte del escuadrón empieza a cambiar cuando, en un operativo, matan al policía Israel Moreno, a quien le han asignado en el libreto el papel de “secuestrador”. Su hermano, el coronel Franco Moreno, irá desenredando

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ, CUESTIONADO HOMBRE FUERTE DEL RÉGIMEN DE DINA, NO SOLO ES AMIGO DE PRADO: FUE SU ABOGADO



Sé por quién no voy a votar

No tengo la menor idea respecto de por quién votaré en las próximas elecciones. Es más: no sé si iré a votar. El escepticismo me dice que no vaya, el pesimismo me condena a la abstención, el realismo me aleja de ese simulacro de urna y tele.

Pero si venciera toda esa pesadumbre y llegara a votar, lo que sí sé es por quiénes no votaría.

No votaría por los canallas que dicen tener resuelto todo, agendado el Perú, claras las cosas, visionaria la mirada, de piedra el pulso. Esos son los peores. Son los del ego obeso y la criollada en la punta de la lengua. Esos juran por su madre que lo que menos tienen es la ambición de coronarse y que lo único a lo que aspiran es a servir al país.

Tampoco votaría por los imbéciles que no saben conciliar género y número y que creen que el castellano en ruinas es otra maravilla del mundo. Me cansé de ser benévolo con la miseria intelectual y la falta de educación. Me he salido del club paternalista que considera que hablar mal es señal de irreprochable etnicidad. (No aludo a los quechua-hablantes que, por culpa de la miserable escuela pública, no tuvieron la oportunidad

de aprender correctamente el idioma de la invasión peninsular).

No votaré por aquellos que reinciden porque están convencidos de que el destino manifiesto les espera esta vez con un anforazo celestial. En esa categoría hay un puerco que vuela en tren fantasma y una señora que recibía dinero de Montesinos cuando su padre hacía llorar hasta a las vírgenes. Ambos buscan vengarse del rabo retorcido y macondiano que los hace inconfundibles. Porky se castiga hasta sangrar para no pecar y la señora se autolesiona homenajando a su padre.

Tampoco votaré por los que prometen el oro y el moro en materia de seguridad pública, como si restablecer cierta paz en las calles no fuera un proceso complejo y difícil si consideramos el grado de pudrición al que ha llegado la policía y los focos de infección que roen la fiscalía y el poder judicial. Esos que dicen que tienen la solución inmediata para acabar con el dominio del crimen son charlatanes peligrosos. Cambiar la cara de Ciudad Gótica pasa por una reforma del sistema judicial, por un cambio drástico en Migraciones, por un esfuerzo concertado de municipios y agentes del orden, por algunas modificaciones del código penal. Y por un largo proceso de reconstrucción de la inteligencia policial (luego de fumigar el Ministerio del Interior y la mismísima PNP).

No votaría jamás por los que han borrado las malas pulgas de sus hojas de vida, por los que se han inventado esas maestrías que apasionan a los bobos formalistas, por los que tienen tesis forjadas en la copiandanga y títulos tenues de universidades de cartón. No votaría por quienes no han tenido éxito honesto en sus oficios o profesiones. No votaría, en suma, por quienes ven en la política el modo que les queda de ascender socialmente. Esos son los que van a robar todo lo que puedan.

Seré frívolo: no votaría por los que tienen notorias cadenas de oro de las que cuelgan cruces que podrían ser gamadas.

Tampoco votaría por alguien que tenga parentesco o proximidad con César Acuña: sé que la estupidez se contagia. Y jamás lo haría por alguien

que no pueda decir que el experimento socialista de Cuba es un fracaso colosal. Del mismo modo que no le daría un voto sino puro desprecio a quien alabara a Donald Trump y a su entenado pervertido: Javier Milei.

No votaré por el que no pueda condenar el genocidio de Gaza perpetrado por el gobierno criminal de Netanyahu ni por el que diga que Dina Boluarte merece comprensión y

respeto. Y mucho menos votaré por quienes tengan algún parecido moral con Fernando Rospigliosi, el enterrador.

En resumen, creo que no votaré. ■





¿Quién eres?

La tierra es roja, el cielo enorme y poblado de unas nubes que se deshacen en hilachas, empapándolo todo. Enmarañada con la sombra de un árbol, la señora espera. ¿Quién eres?, pregunta la gringa que fui. ¿Por qué esa falda surcada de serpientes y esas semillas que resuenan en tus manos? Nosotros somos los shipibo-konibo responde ella. Hasta donde alcanza tu vista y más allá, también la ciudad, todo era nuestro —dice orgullosamente—, como quien comparte un secreto. Se ve que no suele decir esas palabras en voz alta.

La comunidad Bora está a unos minutos en bote desde Iquitos. Las mujeres danzan con los pechos al aire y unas faldas de hoja de palmera. En sus miradas se nota el pesar de convertirse en mercancías. Todo para cobrarle un sencillito a esos turistas que quieren sentirse aventureros viendo bailar a unas indias calatas. Mi amiga también es indígena y me dice con tristeza: son unas personas pobres tratando de ganarse

la vida.

En Lima los shipibo-konibo también son pobres y explotados, pero están llenos de dignidad. La Comunidad de Cantagallo es un espacio de resistencia, siempre bajo asedio. Todos los políticos quieren tomarse fotos con ellos, pero pasaron más de 20 años y aún no tienen título de propiedad. Quisieron obligarles a vivir en rascacielos, donde no podían continuar con sus prácticas culturales como el pintado de telas con plantas. El Estado les quiere forzar a elegir entre ser miembros plenos de esta sociedad o conservar su cultura. Asimilación forzada, se llama en el Derecho Internacional.

Los pueblos indígenas están en las ciudades hace mucho tiempo. Por supuesto aún tienen una agenda central de defensa de sus territorios ancestrales, pero también quieren tener un nivel de vida digno, educación, salud, una vivienda adecuada y acceso a internet, como tú y como yo. Resulta escalofriante que en el Congreso exis-

ta una Comisión llamada de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente. Los legisladores son como esos zoológicos aborrecibles que colocaban al lado de los monos una familia de indígenas de carne y hueso para entretenimiento de los visitantes. Como si los indígenas fueran algo intermedio entre lo humano y lo animal.

Un chico con chaleco morado toca la puerta de tu casa. Te hace muchas preguntas, pero en la número 10 la respuesta mestizo ya está marcada, porque hay metas que cumplir. ¿Por tus costumbres o identidad te sientes quechua, aimara, de un pueblo originario de la amazonía, negro, mestizo? Es lo que calla el censor. Sepultado bajo esta pregunta no formulada yace el esfuerzo de muchas organizaciones que intentaron lograr una foto más real del Perú. Esa imagen certera de nuestra diversidad es necesaria para construir políticas públicas pertinentes, y en definitiva un país más justo.

Una de las formas de justicia es la



MAR PÉREZ

participación política equitativa. Según el pasado censo más de un 25% de la población del Perú es indígena. En proporción, entonces, los pueblos indígenas deberían tener 30 escaños reservados en el Congreso, pero no tienen ni uno. Cuando llegan las elecciones los partidos invitan a dedo a algunos dirigentes y los ponen de relleno en sus listas. Si por casualidad llegan a obtener una curul, impulsan sus propias agendas y no las de los pueblos. Por eso las organizaciones indígenas demandan poder postular directamente a sus candidatos, sin la intermediación de los partidos. Finalmente, estos no son más que una institución colonial y decadente.

No estoy postulando, como cierto candidato, que un presidente indígena sea garantía para salir de esta ominosa situación en la que nos encontramos. Hace tiempo que aprendí a batacazos que los pobres y los indígenas no están inmunizados de la ruindad, y que las mujeres pueden ser miserables y violentas, también con otras mujeres. Sin embargo, estoy convencida de que la autodeterminación de los pueblos no es solo un principio del Derecho Internacional sino también un imperativo moral. Y en la lucha de los pueblos indígenas por que sus derechos sean respetados, el censo es una herramienta fundamental, pues no se puede exigir dignidad para un fantasma. ■

Israel aislado

En vísperas de la noche del lunes 22 de septiembre, cuando comenzó el año nuevo judío 5768, la Unión Europea y diez antiguos aliados de Israel reconocieron al Estado palestino: Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco. El último país que antes dio tal paso fue México, a poco de que Claudia Sheinbaum, la personalidad judía más votada de la historia universal, asumió la presidencia.

Londres y París fueron quienes, al acabar la I Guerra Mundial (1914-18), se repartieron las antiguas provincias otomanas del Medio Oriente trazando fronteras artificiales. Los británicos, al asumir su mandato de Palestina (1920-48), estuvieron obligados a preparar la independencia de dicho país, pero, al igual que en India, se dedicaron a “dividir para reinar” escindiendo territorios por razones religiosas. Si en 1936-39, cuando se produjo el levantamiento proindependencia de Palestina, Lon-

dres hubiera aceptado tal demanda, bien se pudo haber creado un Estado donde cohabitasen pacíficamente judíos, musulmanes, cristianos y drusos.

Pese a que la Autoridad Palestina insiste en estar dispuesta a convivir con Israel (quien quedaría en el 78% de su antiguo territorio), Benjamín Netanyahu jura que nunca aceptará los dos Estados. Su ministra Gila Gamliel (quien milita en su partido Likud) acaba de proponer anexarse Gaza y Cisjordania echando al grueso de sus 5 millones de habitantes.

Paradójicamente, Netanyahu, cuando era joven, propuso incorporar a todos los territorios ocupados en la guerra de 1967 dándoles ciudadanía a todos sus habitantes, una salida que pudo haber abierto las puertas a una democracia multiétnica. David Ben-Gurión, antes de fundar Israel, sostuvo que los palestinos son los descendientes directos de los antiguos israelitas bíblicos que nunca dejaron su tierra (algo confirmado hoy por la

genética), pero, en vez de crear una república de todas las sangres que una a todos aquellos que tienen raíces en las antiguas “doce tribus”, el actual régimen pregona un supremacismo etnorreligioso.

El principal obstáculo internacional para que se dé la salida de dos Estados es Donald Trump. En su extenso discurso megalómano en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, Trump se quejó porque no les dieron el contrato a sus empresas para remodelar el edificio de la ONU o porque no le han dado el Nobel de la paz. También se dedicó a despotricar contra numerosos países, especialmente contra quienes protegen al medio ambiente y permiten que ingresen inmigrantes, pero no hizo ninguna mención a la carnicería de Gaza (algo que sí fue planteado por numerosos expositores). Sostuvo que reconocer a Gaza es premiar a Hamás, mientras que él ha planteado remover a los gazatíes para transformar la franja en su Riviera mientras su embajador en Jerusalén



ISAAC BIGIO

apoya la anexión sionista de Cisjordania.

El aval trumpista a Israel se contrapone con los veredictos de comisiones de Naciones Unidas que afirman que Gaza sufre un genocidio o que piden excluir a Israel hasta del Mundial 2026. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, dijo que la cifra oficial de 65,000 muertos que brinda la autoridad de Gaza puede que sea diez veces mayor. Para los académicos Gideon Polya y Richard Hill hay unos 680,000 gazatíes muertos (380,000 son menores de cinco años).

El martes 23 Trump tuvo una cita con mandatarios de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Allí se discutió un nuevo plan posguerra en el cual Israel dejaría Gaza para que sea ocupada por una coalición de ejércitos de otros países preparando una administración local que excluya a Hamás, postura trabajada con el ex-premier británico Tony Blair.

Ello implicaría abandonar el sueño de la “Gaza de Trump”. Sería un duro golpe contra los extremistas del gobierno de Netanyahu. Mientras tanto, Netanyahu prosigue la guerra para evitar ser depuesto o ir preso. Su belicismo hace peligrar la vida de los rehenes y reservistas hebreos, agiganta el holocausto palestino, aísla al sionismo y puede generar una guerra en la que varias naciones musulmanas se unan contra Israel. ■

Diez días sin internet

Cada vez me es más difícil mantener la concentración al leer, como a casi todas las personas que conozco. Lo atribuyo parcialmente a la edad –nadie lee como cuando era adolescente–, pero también a ese maldito aparato llamado celular, y al internet, y al papel embrutecedor de las redes sociales –las tengo todas–, y a la forma cada vez más corta y adictiva en que se presenta la información. Ahora el *reel* es el rey: videos cortos de 15 o 30 segundos en los que puedo perder, sin darme cuenta, media hora de corrido.

Pero hace dos semanas, el pésimo servicio de Movistar jugó a mi favor. Estaba medio perdido en Salvador de Bahía cuando me llegó un mensaje inesperado: Movistar me informaba que ya no tenía internet. Había gastado todos los (ínfimos) datos que me permitían usar en el extranjero. En conclusión, estaba casi desconectado.

Quise comprar un chip en Brasil, pero hacerlo como extranjero era tan caro como difícil. Salía más barato comprarle a Movistar un miserable paquete de datos de 30 soles que apenas podía usar para emergencias.

Así que estuve casi diez días sin internet.

Volví el lunes a Perú, y mi celular ya tiene de nuevo internet ilimitado. Y hoy me he dado cuenta de cómo cambió mi vida en esos diez días sin internet.

En primer lugar, volví a leer. Yo sé que en la playa y los aviones leo de corrido, pero ahora, sin celular, volví a hacerlo en otros lados. ¿Mi hipótesis? Que las redes sociales, las búsquedas ansiosas, los videos de fondo, los chats, los memes y los *reels* ya no eran competencia, porque como no tenía internet... no podía acceder a ellos. Para distraerme me quedaba la salida analógica: el libro físico, mis libros pendientes. Entendí que si leo tanto en los aviones es porque

no tengo internet, y que leo tanto en la playa porque el sol me impide ver la pantalla del celular.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, empecé a tener ideas y argumentos un poco más largos. Me explico. Mi trabajo “principal” es transmitirme a mí mismo en un programa vía internet, y utilizar las redes sociales para conseguir vistas. Esto implica estar muy atento a las nuevas tendencias y formatos, que son cada vez más cortos y superficiales, y sumergirme de lleno en la inmediatez. Por lo general, si no hablas de algo en las siguientes 24 horas, perdiste la ola.

Sin internet, no sentí la presión de estar tan al tanto de todo. La inmediatez fue perdiendo sentido, y fue apareciendo una cosa rara: la paciencia. Cuando me venía una idea o argumento, lo dejaba reposar, macerar lentamente. No sentía la necesidad de decirlo en público en un *tweet* o en mi



CARLOS LEÓN MOYA

programa. Con los días, a esa idea se le iban sumando –sin ningún esfuerzo– otras cosas raras: una canción, una imagen, una pelota de fútbol. Iban apareciendo analogías, metáforas, paralelos. No digo que la idea fuese buena: solamente era más larga y compleja. Tenía mayor dimensión.

Esto se debe, creo, a que no tenía la necesidad de expulsar la idea de forma prematura a través de mis redes sociales, ni a sus formatos cada vez más cortos que no son útiles para las cosas complejas. Es como si el solo hecho de no tener internet hubiese quitado de mí la pulsión por publicar cualquier idiotez cada dos días, y eso permitió que algunas cosas adquiriesen mejor forma.

En tercer lugar, tuve un mejor uso de mi tiempo. Como no usaba el celular durante el día, en la noche –con el wifi del alojamiento– ya no tenía tantas ganas de mirar idioteces. En la mañana, al despertar, ya no miraba media hora de *reels* sobre perritos. Mi rutina fue cambiando. Desayuné frutas y almorcé verduras. Caminé mucho. Consumí más fibra. Me volví más sano. Dormí más.

De todo esto me di cuenta hoy en la mañana. Me desperté a las 8 y agarré mi celular. Me puse a ver *reels* de perritos. Volví a mirar la hora y ya eran las 9. Había perdido una hora. Había vuelto a ser el de siempre. ■

Hamás como pretexto

Estados Unidos e Israel se hallan cada vez más solos en el escenario internacional. El Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, entre otros países, han reconocido al Estado palestino en el marco de la reunión de la Asamblea General de la ONU. La decisión llega tarde, es simbólica y no cambia la realidad inmediata sobre el terreno, pero va en la línea correcta.

La importancia radica, en primer lugar, en que se trata de aliados históricos: tanto de Estados Unidos como de Israel. En segundo lugar, porque debido a la decisión adoptada por Reino Unido y Francia, ahora EE.UU. es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que no reconoce al Estado palestino. China y Rusia lo hacen desde hace décadas.

En una medida totalmente arbitraria, el gobierno de Donald Trump había revocado las visas de los delegados pa-

lestinos (que debían estar encabezados por el presidente Mahmoud Abbas) con el objetivo de impedir su participación en la Asamblea General. Ello a pesar de que el Estado palestino es miembro observador de la ONU.

Estados Unidos ha aprovechado así de manera indebida el hecho de que la sede de la ONU se encuentre en Nueva York. Sin embargo, en un esfuerzo por sortear la arbitrariedad y el veto a la delegación palestina, se sometió al voto de la Asamblea General una resolución para permitir la participación virtual de Abbas. El resultado fue contundente.

145 países votaron a favor, seis se abstuvieron y cinco votaron en contra. La lista de quienes se abstuvieron y de quienes votaron en contra muestra el aislamiento de Trump y Netanyahu: se abstuvieron Albania, Fiyi, Hungría, Macedonia del Norte, Panamá y Papúa Nueva Guinea, y votaron en contra Is-

rael, Estados Unidos, Paraguay, Palau y Nauru.

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel, en tándem, alegan que el reconocimiento reciente del Estado palestino es una “recompensa” a Hamás.

Sin embargo, lo cierto es que Hamás no reconoce el derecho de existir de Israel. Por lo tanto, el reconocimiento de un Estado palestino (en Gaza y Cisjordania), en el marco de la solución de dos Estados (lo que implica aceptar la existencia de Israel), no es lo que promueve Hamás y no podría ser, en consecuencia, una recompensa para ese grupo.

Por el contrario, la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados es lo que prescribe desde hace décadas el derecho internacional. Más aún, es el objetivo por el que han abogado repetidamente todas las potencias occidentales, incluso Estados Unidos (aunque ahora bajo la administración



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

Trump el apoyo norteamericano está puesto en duda).

No obstante, la política de esas potencias hasta hoy era que la meta de los dos Estados debía alcanzarse como consecuencia de un acuerdo bilateral entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Pero ello encerraba una trampa: en el ínterin Israel continuaba la colonización de los territorios ocupados con el objetivo de hacer cada vez más inviable un Estado palestino.

No solo eso. Para Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel, evitar la solución de los dos Estados ha sido el pilar de su carrera política. Francia y Reino Unido finalmente han decidido enfrentar ese hecho y ejercer presión. La respuesta de Netanyahu ha sido reafirmar que nunca habrá Estado palestino.

El gobierno israelí no está dispuesto a reconocer ningún Estado palestino. Ese es el fondo del asunto. Ni siquiera un Estado de cuyo gobierno Hamás estuviera excluido y del que se hiciera cargo al-Fatah (el partido político que controla la ANP), que desde hace décadas ha renunciado a la lucha armada y reconoce el derecho a existir de Israel.

Desde el punto de vista del gobierno israelí todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo les pertenece. Hamás es el pretexto que necesitan para alcanzar ese objetivo. ■

Una nueva generación



RONALD GAMARRA

El sábado y domingo pasados fueron jornadas resonantes en Lima y varias ciudades del país: masivas manifestaciones ciudadanas hicieron sentir su voz públicamente, en calles y plazas, después de un largo, muy largo, período de silencio. La gente nuevamente toma las arterias para ejercer sus de-

parlamentaria es abrumador. Según todas las encuestas, supera largamente el 90% en todos los sectores etarios y sociales desde hace más de un año. Hay que subrayar, sin embargo, según esos mismos sondeos, que la censura hacia el gobierno y el actual Congreso llega casi al 100% entre los más jóvenes. La clase política gobernante solamente

les suscita una incontenible náusea de asco y desprecio. Y cómo podría ser de otro modo si cada día se esfuerzan por merecerlo con ministros prontos a ser usados y congresistas mochasueldos.

Los jóvenes de hoy solo han visto el caos y la política delincuencial tirar al país desde que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante Ku-

la avanzada de una protesta ciudadana vigorosa.

Porque los adultos maduros y los adultos mayores no debemos ser indiferentes ante la iniciativa de los jóvenes que han salido a las calles. Al contrario, ella nos compromete más que nunca a hacer lo que nos corresponde como generaciones más experimentadas, que hemos visto victorias y fracasos sucesivos, sin llegar a arañar siquiera en el ciclo de nuestras vidas la promesa de una república auténticamente democrática, basada en instituciones legítimas y eficaces, y una ciudadanía empoderada, consciente y libre. Aspiración que no puede quedar como un espejismo o una ilusión perseguida durante los dos siglos transcurridos desde la independencia.

El régimen corrupto estaba convencido de que la gente había quedado adormecida o escarmentada después de la brutal represión de diciembre 2022 y los primeros meses de 2023. Hace apenas unos días, Dina Boluarte se jactaba públicamente de que la gente ya no marchaba, ni tenía motivo para hacerlo. Quería poner en negro sobre blanco que su régimen tenía muy bien controlada la situación política. Las manifestaciones juveniles que acabamos de ver son una contundente bofetada a su jactancia y sus pretensiones. Definitivamente, el régimen del pacto mafioso no las tiene todas consigo. Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando.

A la vez, estas manifestaciones son el anuncio de que jamás habrá olvido para los crímenes cometidos bajo este régimen. La lucha será compleja y plena de vicisitudes, pero al final la reserva moral encarnada en las nuevas generaciones prevalecerá. Quién sabe, puede que eso ocurra mucho más antes de lo que podemos imaginar todos y tengamos rindiendo cuentas por sus pillerías a quienes hoy trafican para copar instituciones y dar ventajas e impunidad a sus favorecidos. Así ocurrió con Alberto Fujimori, que asumió muy orondo su tercer período presidencial y tres meses después fugaba vergonzosamente a Japón.

La gente recuerda el asesinato de 49 compatriotas que manifestaban contra Dina Boluarte y sus aliados, del mismo modo que hasta hoy no se olvidan de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace 40 años, crímenes que este Congreso quiere amnistiar en contra de la Constitución y las leyes nacionales, así como de las normas internacionales reconocidas por nuestro país. Los chicos y las chicas que han inundado las calles de Lima y varias ciudades del Perú son el anuncio de que la lucha por la democracia no está agotada, ni perdida. Al contrario, esa lucha se restablece y fortifica con la energía de la nueva generación que acaba de entrar en escena.



La juventud consciente ha empezado a decir ¡basta!

rechos democráticos a la reunión, a la libre expresión, a la protesta, y lo hace con decisión e ímpetu que no pocos ya creían desgastados. La gente vuelve a moverse en el sentido de la historia, reiniciando el largo camino que se nos ha impuesto recorrer para enfrentar al pacto mafioso que se ha adueñado del poder.

Las marchas del pasado fin de semana tuvieron un carácter marcadamente juvenil desde el momento mismo de su convocatoria. Los manifestantes eran adolescentes y adultos jóvenes, menores de 30 años; en resumen, una nueva generación ciudadana, que muchos denominan la generación Z, que creció desde siempre en la era digital. Ellos mismos se convocaron a través de las redes sociales de internet y a partir de ciertos reclamos puntuales fueron escalando su reivindicación hasta el nivel de la protesta contra el régimen político encabezado por Boluarte y el pacto mafioso del Congreso.

La protesta juvenil no debe sorprender. Sabemos que el rechazo y desprecio hacia Boluarte y la mayoría

czynski hace ya nueve años. Ellos no conocieron la dictadura fujimorista, pero saben bien qué mafia desfachata es el neofujimorismo. De allí el rechazo visceral que Keiko despierta en ellos, mucho mayor que la resistencia que concita en la población en general. En esto, los jóvenes no se equivocan. De ningún modo votarán por Keiko en las próximas elecciones. Eso está quedando muy claro para cualquier observador, hasta para el más miope.

Los chicos y las chicas, sin embargo, todavía no ven clara la perspectiva a seguir. O tal vez sería mejor decir que tienen planos que varían mucho, según la circunstancia que le toca vivir a cada uno, o tienen una gran confusión, reflejo de la atomización de una realidad política disgregada entre 40 partidos inscritos para las próximas elecciones generales, entre los cuales resulta muy difícil distinguir hasta para el más informado. Unidos hoy contra un régimen corrupto, el rechazo juvenil puede a corto plazo diluirse entre una variedad de ofertas políticas más o menos demagógicas, o proyectarse como

HAY UNA GRAN RESERVA MORAL QUE NO HAN AVASALLADO Y ESTÁ DESPERTANDO

Perú empieza a parecerse a Venezuela



GUIDO LEONARDO CROATTO

Se ha puesto de moda “inhabilitar” candidatos. Sucede en la Venezuela de Maduro, en la Nicaragua de Ortega y en el Perú de Dina Boluarte y Keiko Fujimori. Este enfoque y la comparación (odiosa y cierta) puede permitir entender más a fondo cómo una democracia se debilita desde adentro: criminalizando protestas, vulnerando la autonomía judicial, recortando la labor de la prensa, persiguiendo ONG de Derechos Humanos (en Venezuela, en Nicaragua y en Perú sucede exactamente lo mismo, se destituye a fiscales críticos, se recorta el trabajo de las ONG, se persigue el disenso, se recorta la cultura política), inhabilitando candidatos progresistas opositores. La receta es la misma. También la dictadura argentina proscribía candidatos.

Se habla mucho cuando estas cosas suceden en Venezuela (15 asesinados representaron a ojos de Almagro “un baño de sangre”, también lo fueron los más de 60 asesinados en Perú a fines de 2022, tras la caída irregular de Pedro Castillo, sobre los que ni Almagro ni la OEA han dicho hasta el día de hoy ni una sola palabra). La doble vara a la hora de ponderar una “crisis política” puede resultar elocuente. Perú no está lejos de Venezuela. La destitución (“suspensión” por seis meses) de la fiscal Delia Espinoza, luego de denunciar un entramado corrupto de copamiento institucional, es típica de repúblicas que han dejado de serlo. Cuando algo así de grave sucede en Venezuela o Nicaragua, ponemos el grito en el cielo. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando sucede en Perú?

La “incapacidad moral permanente” ha sido empleada para distorsionar el proceso político y presionar desde el Congreso a figuras del arco progresista (en buena medida para lograr el indulto de Fujimori). Es la raíz discrecional de las sucesivas “inhabilitaciones” políticas. Todas reconocen una vinculación teórica difusa con la supuesta incapacidad “moral”. Esta vinculación teórica no es casual, es un indicio de la arbitrariedad con que el Congreso “inhabilita” a sucesivas figuras políticas, a las que previamente considera “inmorales”

en forma “permanente”. Es menester poner esta contradicción política sobre la mesa. Porque está en la base de las sucesivas “inhabilitaciones” que acotan la oferta electoral de modo poco transparente y poco democrático, lo cual incentiva las protestas en las calles, sobre todo de los más jóvenes. Si la “inhabilitación” política fuera realmente por supuesta “incapacidad moral”, en-

tonces un médico congresista que fue responsable de lo que la ONU califica como “crímenes de lesa humanidad” no podría estar sentado en el Congreso “votando” desde allí estas decisiones que horadan –como la salida propuesta de la CIDH– la vida en democracia y el respeto de los derechos humanos. Tampoco las fuerzas que, como denunció la destituida fiscal Delia Espinoza,



Martín Vizcarra: hay tres aspectos muy graves en su inhabilitación.

conspiran desde ese mismo Congreso contra los procesos democráticos, cooptando las instituciones de revisión constitucional.

Martín Vizcarra propuso como presidente la reforma del poder judicial y también la reforma del proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. El fujimorismo bloqueó esas reformas (como las medidas anticorrupción) y destituyó a Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”. Esta “paradoja” política (que explica la no imparcialidad del referido tribunal, tanto en causas de Castillo como de Vizcarra, pero que bloquea sí toda investigación contra Dina Boluarte o Keiko Fujimori) culmina con la “inhabilitación” política y electoral de Martín Vizcarra (tres inhabilitaciones diferentes!, luego de ser el candidato a congresista más votado).

Hay al menos tres aspectos muy graves en la inhabilitación de Vizcarra,

que recuerdan lo que sucedió hace treinta años con Alan García, quien recurrió al sistema interamericano para resguardar sus derechos políticos y la integridad del proceso electoral, hoy nuevamente amenazada.

Dos hechos inconstitucionales que refuerzan el carácter persecutorio de la medida: 1) que se criminalice a Vizcarra en forma textual por haber recurrido al sistema interamericano, como si recurrir a una instancia legal fuera “un delito” y no un derecho. 2) Que se excluya a Vizcarra de la dirección o adscripción a un partido político (¡propio!), lo cual configura un acto que trasciende la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y refuerza el carácter persecutorio y arbitrario de la medida, tanto como el requisito de que su nombre “no figure” en las encuestas, censurando así a la ciudadanía que expresa su nombre como intención de voto. Esto conduce a integrar en las encuestas a su hermano, Mario Vizcarra, quien ya figura tercero. Pero tener que recurrir a estos mecanismos para sortear (como en Venezuela, con María Corina Machado) los artilugios “inhabilitadores” de figuras opositoras (en contextos de poco respeto general a derechos civiles, como sucede en Perú o Venezuela) no parece un camino saludable para la representatividad. No es un camino saludable para una democracia.

La extensión de la inhabilitación política que se produce en el caso Vizcarra no solo choca de frente con el espíritu democrático de la convención americana, sino con el espectro del derecho comparado. El peso de la inhabilitación política solo encuentra parangón doctrinario en periodos de interrupción democrática (es decir: dictaduras) o

gobiernos que, como el venezolano, persiguen y censuran toda oposición. La Venezuela de Maduro es un espejo roto en el que el Perú de Dina Boluarte puede mirarse. Venezuela y Perú son dos modelos no democráticos que con premisas diferentes llegan sin embargo al mismo lugar: inhabilitar y censurar toda “oposición” política.

No puede pasarse por alto que en su último proceso penal, en el que fue “condenado” a “prisión preventiva”, un sinsentido jurídico penal que no registra antecedentes en la dogmática ya que una prisión preventiva nunca puede constituir una “pena” formal, la fiscalía tomó como “indicio” en contra de Vizcarra el hecho de que este ejerciera su derecho a apelar al sistema interamericano. Esto también es propio de regímenes no democráticos, como son Venezuela o Nicaragua. Perú se encuentra en una situación límite, semejante. ■

TAMBIÉN LA DICTADURA ARGENTINA PROSCRIBÍA CANDIDATOS

AFP: desaparecida la vergüenza

Cuando en 1992 se inventaron las AFP (D.L. 25897), se nos aseguró que servirían a tres propósitos:

1. Descargar al Estado del tremendo peso previsional que le generaba un forado fiscal enorme (y que administraba mal) y transferirlo a las espaldas individualizadas de todos los trabajadores. De ahí en adelante, las contribuciones previsionales de los peruanos serían gestionadas profesional y competitivamente por un privado que cobraría una comisión (razonable) por ello, y todo en cuentas individuales (cada uno baila con su pañuelo, porque #SolidaritySucks).

2. Incrementar el ahorro nacional (que Alan I pulverizó) para invertirlo en el Perú y ayudar a cerrar la gigantesca y grotesca brecha de infraestructura.

3. Asegurar que los peruanos que se sacaban el ancho trabajando por 40 o 50 años y/o sus familias, pudieran acceder a una pensión digna cuando ya no pudieran trabajar por la razón que fuera: edad, salud, accidente, invalidez o muerte. Si tu último sueldo fue de S/1,000, tu pensión debería ser de S/500 (pensión digna: una tasa de reemplazo de 50% como mínimo).

Habiendo pasado casi 33 años desde que el ministro de Economía que firmó el decreto que inventó a las AFP abrió la suya, podemos dar una mirada a cómo vamos con los objetivos:

1. El Estado, a través de la ONP, sigue gestionando un fondo de pensiones con 1.4 millones de afiliados y 770 mil pensionistas que le cuesta S/7,774 millones al año. A pesar de que se han flexibilizado los requisitos para obtener una pensión (antes si no acreditabas 20 años de aportes como mínimo, no veías un centavo de tu plata), menos de la mitad de esos 1.4M de aportantes a la ONP accederá a una pensión (cuyo máximo estándar es menos de S/900). Las AFP se reparten utilidades todos los

COMO ADMINISTRADORAS DEL DINERO AJENO, LAS AFP PERUANAS HAN SIDO EN EL MEJOR CASO MEDIOCRE

años independientemente de si sus afiliados ganaron o perdieron, y si compiten entre sí, no se nota.

2. El ahorro nacional sí se incrementó de manera importante y se canalizó a obras de infraestructura a través de instrumentos financieros. Por diversas razones, algunas AFP invirtieron parte del dinero de sus aportantes en empresas relacionadas a los grupos económicos de las



LUIS DAVELOUIS



mismas AFP (y cobraban por ello). Más adelante, como el Perú es un país pequeño y a los afiliados les interesa tener pensión y no que Chavimochic tenga 18 etapas, un porcentaje alto de los fondos salió al extranjero. Eso estuvo bien, pero la brecha de infraestructura, inmensa, sigue allí.

3. Las AFP tienen 10.1 millones de afiliados, pero solo cuatro de cada 10 cotizan (4 millones). Según ellas y sus defensores, 6.4 millones de afiliados tienen menos de una UIT (S/5,350) de saldo lo que, sumado a los casi 2 millones que se quedaron sin saldo tras los retiros anteriores, dejará un total de 8.6 millones de cuentas de afiliados sin saldo tras este próximo octavo retiro. Si la PEA entera (18 millones) se jubilara mañana, las AFP solo cubrirían a uno de cada 10 peruanos. La pensión promedio que pagan las AFP –la tasa de reemplazo– ronda el 28%. Es decir, si cuando usted trabajaba ganaba S/1,000, su pensión será de S/280. En Chile y en México, en cambio, sería de S/350; mientras que en Colombia, S/400. Como administradoras del dinero ajeno, las AFP peruanas han sido en el mejor

caso mediocres; pero como negocio para sus dueños, su desempeño es excelente: son más rentables que la mayoría de AFP de la región.

Hay varias moralejas aquí, pero quedémonos con una. Las AFP movilizaron una cantidad enorme de recursos para que el poder de turno en el Congreso les hiciera una ley (Ley de Reforma Previsional 2025) para: 1. Prohibir todos los retiros (voluntarios y el 95,5%) y 2. Obligar a los independientes a aportar, aunque a estos les sea inútil. ¿Por qué? Porque las comisiones que cobran se calculan sobre el tamaño de los fondos que administran: con cada retiro esos fondos se reducen y las AFP cobran (y ganan) menos. Prohibir los retiros impide que el fondo se reduzca y capturar a los independientes asegura una fuente nueva y adicional de recursos para hacer crecer el fondo.

Porque ojo: en sentido estricto, las AFP no necesitan desinvertir (utilizar el dinero de los fondos que administran) para pagar pensiones: según cifras de la SBS a junio, al mes recaudan S/1,430 millones de 4 millones de afiliados y pagan entre S/600 y S/800 millones a unos 775,000 beneficiarios entre jubilados, inválidos y sobrevivientes.

La rentabilidad era una herramienta de ventas, la obligatoriedad una captura de rentas.

Al principio parecía que las AFP lo habían logrado: la ley se aprobó al guerrazo (con 38 votos de 130 y con truco) y salió el reglamento. Pero cuando los jóvenes (futuros

trabajadores independientes, casi todos) salieron a las calles a protestar, los congresistas que promovieron y aprobaron decididamente la ley pro-AFP se retractaron y en un gesto más patriótico que el pan con chicharrón, le echaron la culpa a otro.

Como el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano poscovid y las elecciones son ahorita, el repliegue vino con yapa: el octavo retiro voluntario de 4 UIT.

Aunque los voceros de las AFP no hayan hecho *disclaimer* alguno y se hayan presentado en los medios como analistas y académicos independientes mientras les cobraban consultorías, vamos a pensar bien. Las AFP hicieron un trabajo de *lobby*, largo, costoso, sostenido, persistente y perseverante y el pan se les quemó... cuando ya había salido del horno.

El enorme problema previsional del Perú sigue allí, como hace 33 años, pero ahora es más grande (85% de la PEA desprotegida vs. 30%-50% en Chile o México) y complejo. La política, por su lado, tampoco ha cambiado. Solo ha desaparecido la vergüenza.

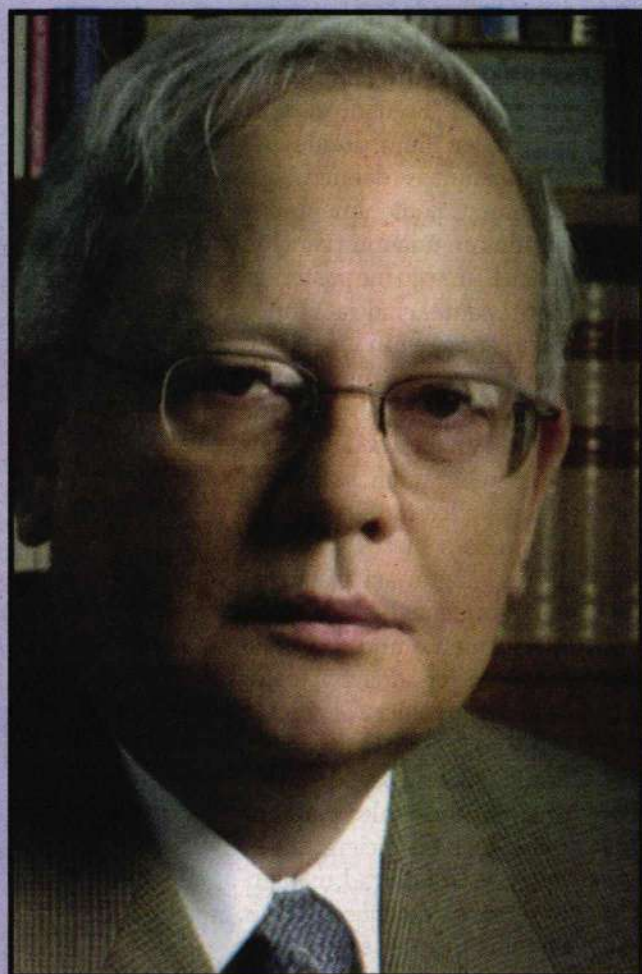
HILDEBRANDT

en sus trece

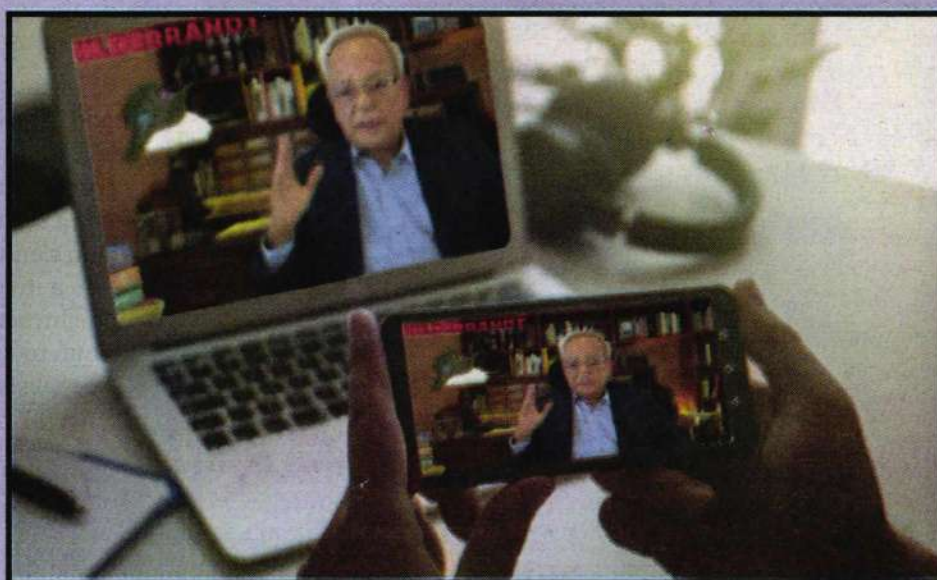
¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las **9 DE LA NOCHE**, siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
223,312 suscriptores
y ha sumado
30'336,781 vistas



Juan José Santiváñez: dime a quién defiendes y tendré una idea de quién eres.

FOTO JOEL DURÁN • HT3

La clientela de Santiváñez

► El actual ministro de Justicia tuvo una surtida cartera de patrocinados. Alias Diablo fue sólo uno de ellos

SONIA SUYÓN

"Tengo 22 efectivos de escolta", se ufanaba Juan José Santiváñez a los cinco días de asumir como ministro del Interior en un momento que le envió vía WhatsApp a su entonces amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo. Fue el 21 de mayo de 2024, el día en que el policía lo citó en el chifa de San Borja, donde Santiváñez fue por lana y salió trasquilado.

"El Diablo" no es el único patrocinado de Santiváñez del submundo del crimen. Antes de llegar a ser ministro y aun siéndolo defendió a muchos otros delincuentes en su bufete de abogado penalista. Santiváñez se desplazaba a Trujillo, Piura, Cajamarca, Junín, o hasta donde hiciera falta ejercer su talento de abogado avisado y con influencias.

No se descar-

ta, entonces, que surjan más audios reveladores de familias estafados.

EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE

-En agosto de 2018 fue capturado en plena carretera central, a bordo de un ómnibus cuando viajaba de Huánuco a Lima, el capitán en situación de retiro Jhony Arévalo Quispe, exjefe de la Dirección Policial contra el Crimen Organizado de Piura. Pesaba contra él una orden de captura por el delito de homicidio calificado. Arévalo estaba investigado por integrar el "Escuadrón de la muerte" en Piura, donde cuatro presuntos delincuentes fueron extrajudicialmente ejecutados en una intervención policial. Arévalo fue posteriormente sentenciado a 22 años de prisión. Según los relatos de dos testigos protegidos, Santiváñez era abogado de Arévalo y habría pedido pagos de entre 20 mil hasta 60 mil dólares a los familiares para sobornos a jueces y fiscales afines y lograr así absoluciones o condenas benevolentes. Precisamente uno de los casos mencionados por estos testigos involucra al capitán en retiro Arévalo Quispe, cuyo familiar habría pagado 60 mil dólares adicionales para coimir a quien hiciera falta y obtener su libertad mediante recursos de *habeas corpus*. No obstante, esos beneficios habrían sido denegados, pese al desembolso. Según los testigos, Santiváñez operaba con la ahora reenganchada jueza superior Enma Benavides, hermana de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Justamente uno de los hijos de la jueza Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el estudio del ministro.



Edwin Ortiz, exdirector del penal de Huacariz, otro de los patrocinados por Santiváñez. Fue acusado de cobrar cupos a los internos a cambio de dejar pasar teléfonos y drogas al penal. Actualmente está prófugo.



Según otro testigo protegido, los familiares del general en situación de retiro Héctor Petit Amésquita, exjefe de Administración de la PNP y acusado de sobrevalorar mascarillas durante la pandemia, pagaron a Santiváñez 64 mil soles destinados a coimas para jueces y fiscales. Sigue preso.

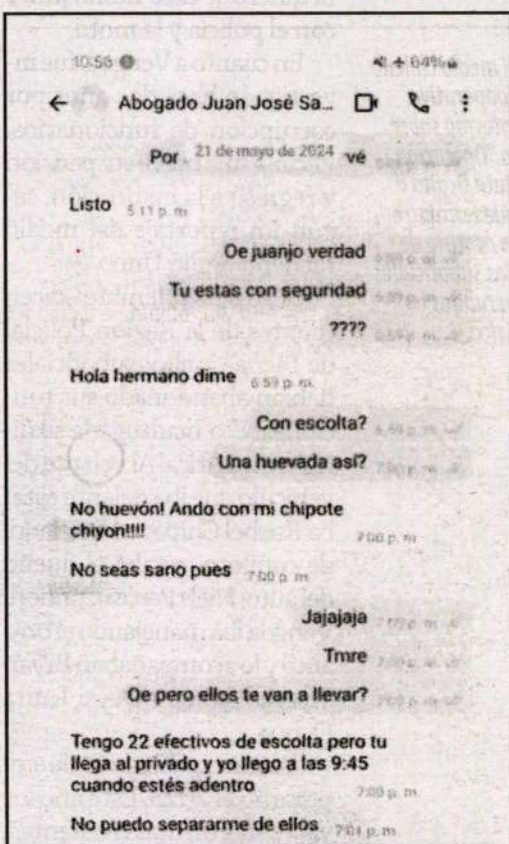


Según un testigo protegido del Ministerio Público, 60 mil dólares le habrían pagado a Santiváñez los familiares del capitán en situación de retiro Francisco Arévalo Quispe, acusado de ser miembro del Escuadrón de la muerte y sentenciado a 22 años de prisión.



El capitán PNP Junior Izquierdo grabó por dos horas y media a Juan José Santiváñez, cuando le contaba los encargos delictivos de Dina Boluarte. En represalia fue enviado como policía comunitario a Moquegua.

Santiváñez no sólo defendió a policías al margen de la ley, también fue abogado de avezados delincuentes como José Dany Quispe Huamán, alias "Shakira", con antecedentes de robo agravado y tráfico ilícito de drogas.



Santiváñez se jacta de tener 22 policías como resguardo personal.



"General que no trabaja SE VA", decía el chaleco mayor de los Boluarte.

-El ex comandante PNP Enrique Prado Ravines es acusado de ser el jefe del Escuadrón de la muerte que ejecutó extrajudicialmente a 30 presuntos delincuentes, en supuestos enfrentamientos en diversas ciudades del país, con el fin de sumar méritos, ganar puntos para ascensos, bonos y presupuestos adicionales. Estuvo prófugo por casi ocho años. En su ausencia fue sentenciado a 35 años de prisión. En febrero de este año fue capturado, después de que el Ministerio del Interior ofreciera, por un lado, una recompensa de 100 mil soles para quien colaborara a dar con su paradero. Santiváñez ha reconocido que fue su "abogado administrativo" cuando enfrentó las investigaciones dentro de la Policía. Sin embargo, hay quienes están

convencidos de que también ha ejercido su defensa penal. A donde va igualmente ha tratado de limpiar su imagen y hasta reivindicarlo. En Trujillo, por ejemplo, siendo ministro del Interior, dijo que la delincuencia avanza debido a que se había encarcelado a policías que luchaban contra las bandas criminales.

EL GENERAL DE LAS MASCARILLAS SOBREVALUADAS

-General Héctor Petit Amésquita, exdirector de Administración de la Policía, investigado por compras irregulares y sobrevaluadas del rancho policial y de mascarillas durante la pandemia del covid-19. Según los testigos protegidos, Santiváñez ha-

bría recibido 64 mil soles en efectivo, en su mismo estudio de abogados, por parte de los familiares del general Petit para sobornar al fiscal del caso.

"LOS INTOCABLES EDILES"

-General PNP José Antonio Figueroa Gonzales, exjefe policial de Junín que estuvo implicado en el caso "Caliche". Además, según investigaciones policiales y fiscales, era miembro de "Los intocables ediles" y, precisamente, en diciembre de 2018 fue detenido por presuntamente conformar la red de protección de esa banda que se dedicaba a cobrar cupos a los vendedores ambulantes y que era liderada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba, hoy preso. Justamente,

en el año 2020, cuando Vizcarra nombró como ministro del Interior al general Gastón Rodríguez, este no tuvo mejor idea que llevar como jefe de gabinete de asesores a Juan José Santiváñez. Por entonces la prensa alertó sobre los antecedentes de este asesor abogado de policías en problemas. Ante el escándalo, el entonces ministro y su flamante asesor Santiváñez, que sólo duró dos días, tuvieron que renunciar.

En febrero del año pasado el general Figueroa, expatrocinado de Santiváñez, fue condenado en Junín a 8 años de prisión, junto a otros implicados, por el delito de peculado. Según la sentencia, Figueroa y compañía simulaban la construcción de un campo deportivo para una donación con el fin de extraer del río Shullcas 40,000 m² de un material de construcción de alto valor, el caliche, causando un perjuicio de un millón 500 mil soles al Estado. El pretexto fue construir un campo deportivo en el Complejo Policial del Incho, en Huanayo.

Siete meses después de su sentencia, el 14 de agosto de este año y ya con Santiváñez como ministro de Justicia, Figueroa y los otros involucrados en el caso fueron absueltos por la Sala de Apelaciones de Junín.

"LOS PIARAS DE HUACARIZ"

-Edwin Ortiz, exdirector

del penal de Huacariz de Cajamarca e integrante de la banda "Los piaras de Huacariz", acusado de cobrar cupos a cambio de dejar ingresar celulares y droga a los internos del penal. Actualmente está prófugo de la justicia. Esta red delictiva operó entre los años 2016 y 2020. Audios, videos, chats de WhatsApp y testimonios revelaron la trama de corrupción de esta red que fue descubierta por la Fiscalía con apoyo de la Diviac.

"Se dedicaban a cobrar cupos a los internos del penal, les cobraban hasta para ir al baño. Ellos mismos metían los celulares y se los alquilaban a los presos, también les cobraban cupos por meter droga o visitas excepcionales", sostuvo el fiscal Jorge Chávez Cotrina en su investigación.

En un video se le ve a Juan José Santiváñez defendiendo a su cliente aún prófugo e integrante de "Los piaras de Huacariz".

"No existen graves y fundados elementos ni el soporte jurídico de esos elementos para vincularlo a la pertenencia de esa organización y mucho menos a la jefatura o su liderazgo. Lo que nuestro patrocinado nos ha referido es que considera que existen otro tipo de intereses (...) Esto pudiera ser motivo de una represalia, una venganza, una vendetta, incluso de policías involucrados en años anteriores en hechos de corrupción", sostuvo Santiváñez en su alegato. ■

PDI desarticuló red peruana de tráfico de ketamina con policías implicados

Publicado: Miércoles, 17 de Septiembre de 2025 a las 18:20hrs. | Periodista Digital: Cooperativa.cl

- La operación "Ruta Oculta", en Arica, culminó con la detención de cinco personas, incluidos dos miembros activos de la Policía Nacional de Perú.
- Se incautaron más de 11 kilos de droga oculta en vehículos que cruzaban el Complejo Fronterizo Chacalluta.



El medio chileno *Cooperativa* informa sobre la "Operación Ruta Oculta" que terminó en la captura de dos suboficiales peruanos en Arica.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

"La ketamina no sólo se destina a consumo sino también como insumo para conseguir otro tipo de sustancia que está de moda, que es el tusi", explica Milton Rojas, coordinador de Cedro.



Mario Carrera Guerrero, fiscal regional de Arica y Parinacota: "Perú tiene normas más laxas para la venta de estas sustancias. Allí es más fácil tener acceso a esta droga, la trasladan desde allá".



FOTO CÉSAR ZAMALLOA • H13

César Amaro, exdirector de la Digemid: "La ketamina no está en la lista de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. En este caso solo se exige una receta médica simple para su indicación y uso en personas hospitalizadas".

iQué tal mina!

► Cae en Arica una banda peruana de narcos en la que estaban dos policías en actividad. Se les encontró 11 kilos de ketamina

JULIO ROSPIGLIOSI

La Fiscalía de Arica llevaba dos meses siguiéndoles el rastro a dos vehículos

con placa peruana que hacían constantes viajes relámpago a la ciudad chilena. Había semanas que cruzaban la frontera hasta cuatro o cinco veces. Los autos entraban juntos y

nunca se quedaban más de 24 horas en la ciudad. A bordo siempre iban los mismos pasajeros: cinco adultos, entre ellos los suboficiales de la PNP Fredy Benigno Vengoa Ccoa

ruta oculta

Los suboficiales Rusbel Chipana y Fredy Vengoa se conocen desde hace por lo menos seis años. Han pasa-

do por distintas dependencias tacneñas. Chipana estaba destacado en la base policial de Challapalca. Vengoa trabajaba en la Unidad de Emergencias, la Central 105, de Tacna. Sus fojas de servicio los perfilan de cuerpo entero.

En octubre del 2022 tres personas denunciaron a Chipana por estafa. Según los testimonios, lo contactaron porque el suboficial estaba anunciando en redes la venta de una moto Pulsar. Se presentó como agente de la PNP para inspirar confianza y cerrar los acuerdos. Los tres incautos cayeron en la trampa y le depositaron 9,000 soles. El dinero se hizo humo junto con el policía y la moto.

En cuanto a Vengoa, fue investigado hace dos años por corrupción de funcionarios. Recibió una breve suspensión y regresó a la institución, según un reportaje del medio tacneño Radio Uno.

El 16 de septiembre –dicen fuentes de la Región Policial de Tacna– ambos suboficiales habían abandonado sus funciones. Esa madrugada se dirigieron a Arica. Al volante del vehículo que iba delante estaba Rusbel Chipana. A su lado, de copiloto, estaba el dueño del auto: Niels Percca Condori. Vengoa iba manejando el otro auto y lo acompañaban Bryan Ticona Quilca y Deysi Laura Ochoa.

Las excursiones a Chile empezaron el 2023. Este año los viajes fueron más frecuentes. Chipana registra 23 ingresos y salidas; Vengoa 13. Eran viajes de pocas horas y nunca se quedaban a dormir. La madrugada del pasado 16 de septiembre la incursión en territorio chileno fue diferente.

Hacia unos meses que la Fiscalía de Arica había puesto en marcha la operación "Ruta Oculta", cuyo objetivo era identificar patrones sospechosos en las personas que cruzan por el complejo fronterizo de Chacalluta. Para las autoridades vecinas los vehículos peruanos presentan "factores de riesgo".

"Nosotros vemos quiénes van entrando, quiénes repiten, cuánto tiempo se quedan en la ciudad. Todo eso va generando factores de riesgo bajo una matriz que se determinó con anterioridad. Así que, según esos patrones, se esperaba el ingreso de esos dos vehículos. Había una suerte de movimiento predecible",



El suboficial Fredy Vengoa Ccoa trabajaba en la Unidad de Emergencias, la Central 105, de Tacna. El 16 de septiembre abandonó sus funciones.



Suboficial Rusbel Chipana Tito estaba destacado en la base policial de Challa-palca. En el vehículo que manejaba se halló la ketamina.

dice a este semanario Mario Carrera Guerrero, fiscal regional de Arica y Parinacota.

Sólo tenían que esperar. Así que el martes 16, cuando los cinco peruanos cruzaron la frontera, comenzaron a seguirlos. Los dos carros ingresaron a la ciudad de Arica por una de las avenidas principales. Vengoa, al volante, iba detrás del vehículo de Chipana. En ningún momento sospecharon que estaban siendo vigilados por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Arica. Hasta que fueron detenidos.

Cuando los agentes revisaron el auto que conducía Chipana, encontraron 10 paquetes de ketamina en polvo. La droga incautada tuvo un peso de 11,6 kilos, equivalente a 46,600 dosis y valorizada en 699 millones de pesos chilenos, unos 2,5 millones de soles.

Los cinco peruanos quedaron detenidos. El Ministerio Público de Chile podría pedir penas sobre los 10 años. Las investigaciones apuntan ahora a dar con el destinatario final de la droga. Medios de ese país hablan de la preeminencia en este negocio del Tren de Aragua y sus células. El fiscal Carrera es más cauto.

“Actualmente la presencia

de esa organización no es de tanta relevancia como lo era años atrás. Es una hipótesis, sí, pero es tan válida como que pueda haber ya delincuentes chilenos o de otra nacionalidad”, apunta el fiscal.

BOOM

La ketamina es un anestésico empleado principalmente en cirugías, tanto para humanos como para animales. En

el mercado negro su principal uso es como insumo para elaborar otras drogas. “La ketamina no sólo se destina a consumo sino también como insumo para conseguir otro tipo de sustancia que está de moda, que es el tusi”, explica Milton Rojas, coordinador de Cedro.

El tráfico de ketamina hacia Chile ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según un reporte de Crimen

Organizado de la Fiscalía chilena, en los últimos cuatro años las incautaciones crecieron en 500%. Y Perú se ha convertido en el principal abastecedor. El informe es del 2025.

Sólo el año pasado, en Arica, la policía detuvo a 14 integrantes de la banda peruana “Los Costeños”. A los delincuentes los pescaron cuando ingresaban por la costa utilizando una pequeña embarcación desde Tacna. Se les incautó 96 kilos

de ketamina en polvo, un récord en ese país.

“¿Por qué viene de Perú? Porque Perú tiene normas más laxas para la venta de estas sustancias. Allí es más fácil tener acceso a esta droga, la trasladan desde allá”, dice el fiscal Carrera.

Para comprar ketamina en Perú sólo se requiere una receta médica simple. “La ketamina no está en la lista de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Por tanto, se maneja como un producto de uso hospitalario. En este caso sólo se exige una receta médica simple para su indicación y uso en personas hospitalizadas. Las farmacias pueden hacerlo si cumplen con las reglas de juego: provisión de fuente autorizada y venta sólo con receta”, dice César Amaro, jefe de la Digemid.

“Lo que viene ocurriendo es que hay una desviación hacia el mercado ilegal, lo mismo que ha estado ocurriendo con el fentanilo”, apunta Milton Rojas.

En 2021 la Dirandro incautó un total de 42 kilos de ketamina que estaba lista para ser vendida en el mercado negro. En el 2022 la incautación de la droga ascendió a 91 kilos. “Situación que evidencia poco más del 100% en referencia al año anterior”, dice un reporte del Mininter de julio del 2023. Solicitamos a la PNP datos actualizados, pero no respondieron.

Desde Arica, el fiscal Carrera señala que ya dio aviso a la Fiscalía peruana para que inicie las investigaciones sobre el origen de la ketamina que transportaban los policías peruanos el pasado 16 de septiembre. Le preocupa, sin embargo, otro aspecto.

“El peor escenario es que tuviésemos funcionarios corruptos en ambos países y que empezaran a operar en conjunto. Acá ya tuvimos unos meses atrás un traslado de ketamina desde Iquique, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, hacia la zona central del país. Y esa ketamina que subió a ese avión desde Iquique es muy probable que haya ingresado al país por Arica desde Tacna. Eso demuestra cómo se está tratando de permear a las instituciones públicas”, advierte Carrera. A la Policía peruana no parece preocuparle mucho el asunto. Lo que le importa es que las denuncias no se hagan públicas.

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO
N° 62386-2025-MIGRACIONES

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a solicitud de ROSPIGLIOSI ARANDA JULIO CESAR

CERTIFICA

Que, la persona : VENGOA COOA FREDY BENIGNO
Nacionalidad : PERUANA Fecha Nacimiento : 04/01/1998
Documento : DNI 77141077

Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

TIPO DE MOVIMIENTO	FECHA DE MOVIMIENTO	PROCEDENCIA DESTINO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
SALIDA	16/09/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	08/09/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	08/09/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	26/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	26/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	25/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	25/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	24/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	24/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	23/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	23/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	22/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	22/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	15/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	15/08/2025	CHL	DNI	77141077
ENTRADA	11/08/2025	CHL	DNI	77141077
SALIDA	11/08/2025	CHL	DNI	77141077

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por MIGRACIONES, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://migraciones.gob.pe/verificacion/> ingresando el siguiente código de validación: 0e589183e7828400

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO
N° 62535-2025-MIGRACIONES

La Superintendencia Nacional de Migraciones, a solicitud de ROSPIGLIOSI ARANDA JULIO CESAR

CERTIFICA

Que, la persona : CHIPANA TITO RUSBEL ALVARO
Nacionalidad : PERUANA Fecha Nacimiento : 27/11/1997
Documento : DNI 75862444

Registra el siguiente Movimiento Migratorio:

TIPO DE MOVIMIENTO	FECHA DE MOVIMIENTO	PROCEDENCIA DESTINO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
SALIDA	18/09/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	08/09/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	08/09/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	08/09/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	26/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	26/08/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	26/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	24/08/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	24/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	23/08/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	23/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	22/08/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	22/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	11/08/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	11/08/2025	CHL	DNI	75862444
ENTRADA	31/07/2025	CHL	DNI	75862444
SALIDA	31/07/2025	CHL	DNI	75862444

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por MIGRACIONES, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://migraciones.gob.pe/verificacion/> ingresando el siguiente código de validación: 5d52938e6572b368

Registro migratorio de Fredy Vengoa Ccoa y Rusbel Chipana Tito. El primero tiene 13 ingresos a Arica. El segundo, 23.

A la segunda fue capturado. La policía paraguaya atrapó a Erick Moreno Hernández, el criminal más buscado de nuestro país. "El Monstruo" se había salvado de caer preso en marzo pasado porque fue alertado de que se preparaba un operativo en su contra. Esta vez no tuvo tiempo de huir. El 24 de septiembre los agentes guaraníes recibieron información sobre la ubicación del delincuente y ese mismo día organizaron el operativo y lo capturaron. Se escondía en una precaria vivienda del barrio Mitai, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 30 minutos de Asunción. Había alquilado el inmueble con un nombre falso hace cinco días.

Su captura volvió a poner bajo los reflectores los vínculos del "Monstruo" con la Policía peruana. Varias versiones apuntan a una larga nómina de agentes que brindaban servicio a la banda de este ranqueado delincuente. No se descarta que en la planilla haya oficiales de mediano o alto rango.

DESTINO PARAGUAY

Desde febrero de este año un miembro de "Los Injertos del Cono Norte" estaba colaborando con la Fiscalía de Crimen Organizado del Perú. El "agente especial" venía contando detalles de la organización criminal liderada por Moreno Hernández. Fue él quien confirmó que vivía a caballo entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Fue entonces que un equipo especial de la Dirincrí contactó a sus colegas de estos países para intercambiar información que ayudara a dar con su paradero.

Moreno tiene en su haber dos sentencias, una por robo agravado y otra por secuestro. Además, es sindicado como el principal responsable de los secuestros y extorsiones que ocurren en Lima Norte. "El Monstruo" había logrado controlar ciertas plazas en Comas, Independencia y Ancón.

También hay indicios sólidos que apuntan a que hay organizaciones crimina-

Érick Moreno Hernández (34) había logrado sortear hasta hace unos días los operativos en su contra. Topos de la PNP lo alertaban.



Monstruo caído

► Esta vez no pudieron alertarlo desde Lima. En marzo pasado ya estaba ubicado, pero bastó que la policía paraguaya se contactara con la peruana para que el criminal desapareciera antes del operativo



En esta vivienda del barrio de Mitai, en la ciudad de San Lorenzo, fue capturado la noche del 24 de septiembre alias Monstruo. La policía paraguaya recibió la llamada de un informante ese mismo día.



Este fue el pasaporte con datos falsos que se le encontró a Moreno Hernández el día de su captura. Se hacía pasar como Pierre Jesús Neciosup Rodríguez.

les y delincuentes de poca monta que utilizan el alias de Moreno para extorsionar en los distritos del norte de la capital. El uso de su chapa criminal como si fuera una franquicia del terror le sirvió para acrecentar su fama y a

la prensa para agrandar el tamaño de los titulares. En marzo de este año, a pedido de Perú, se emitió una alerta roja para que la Interpol empezara a pisarle los talones. El periodista paraguayo Iván Leguizamón

ha contado en un documentado monólogo televisivo de la cadena ABC-Color que, a fines de ese mes, la policía de su país ya tenía localizado a Moreno en una casa de la ciudad de Luque. Allí estaba viviendo con su esposa

y madre de su hijo, Liseth Cruz Ruiz. "Los policías paraguayos pidieron a los peruanos documentación complementaria, porque ya estaba localizado el objetivo. Pero los policías peruanos

demoraron 12 horas en contestar. Cuando la policía paraguaya entró a la casa, no encontraron a nadie. Sólo recuperaron unos videos de unas cámaras instaladas en la casa", contó el periodista en su programa de la cadena ABC.

La policía de Paraguay ha corroborado la versión del periodista. "Nosotros habíamos allanado en Luque, en marzo pasado, la vivienda donde él estaba residiendo. Por los análisis de los circuitos incautados, se nota que había recibido una llamada telefónica internacional. A partir de ahí, raudamente, abandona el lugar antes de ser intervenido", contó al medio ABC-Color Luis López, jefe del departamento contra el crimen organizado de ese país.

El oficial López añadió algo más. Dijo que el asunto le llamaba la atención por los vínculos de Moreno con "la clase política y las fuerzas de seguridad" peruanas.

Moreno Hernández siguió comunicándose con los miembros de su organización desde Paraguay. Una disposición fiscal enviada a sus homólogos paraguayos el 9 de abril -a la que accedió este semanario- señala que "integrantes de la organización criminal investigada, así como el presunto líder, vendrían realizando llamadas telefónicas extorsivas desde la República de Paraguay, además de giros de dinero a dicho país".

En junio el fiscal Edwin Velásquez logró la detención en Perú de varios de los subalternos de la banda, incluyendo a la cajera de la organización, a la pareja y a la madre de Moreno Hernández. El operativo permitió identificar a los delincuentes que se encargaban de enviar remesas de dinero por Western Union precisamente a Brasil, Bolivia y Paraguay.

A pesar de las detenciones, los envíos de dinero no cesaron. "Los envíos siguieron ocurriendo incluso después de esas detenciones. Hemos detectado nuevos envíos de dinero por Western Union a Paraguay que serían para él. Toda esa información financiera fue enviada a ese país", dice una

CONTINÚA EN LA PÁGINA 31

fuentes que investiga el caso.

El golpe decisivo contra Moreno se dio gracias a un informante de la Policía paraguaya. La mañana del último miércoles el Departamento de Investigaciones de Amambay recibió la llamada decisiva. Al otro lado del teléfono un sujeto dijo saber el paradero exacto del "Monstruo" y dio las coordenadas. El despliegue tenía que ser rápido. El comisario policial paraguayo Hugo Grance ha señalado en la cadena ABC-Color que, para este operativo, decidieron reducir el equipo de agentes que iba a dar el golpe para evitar filtraciones.

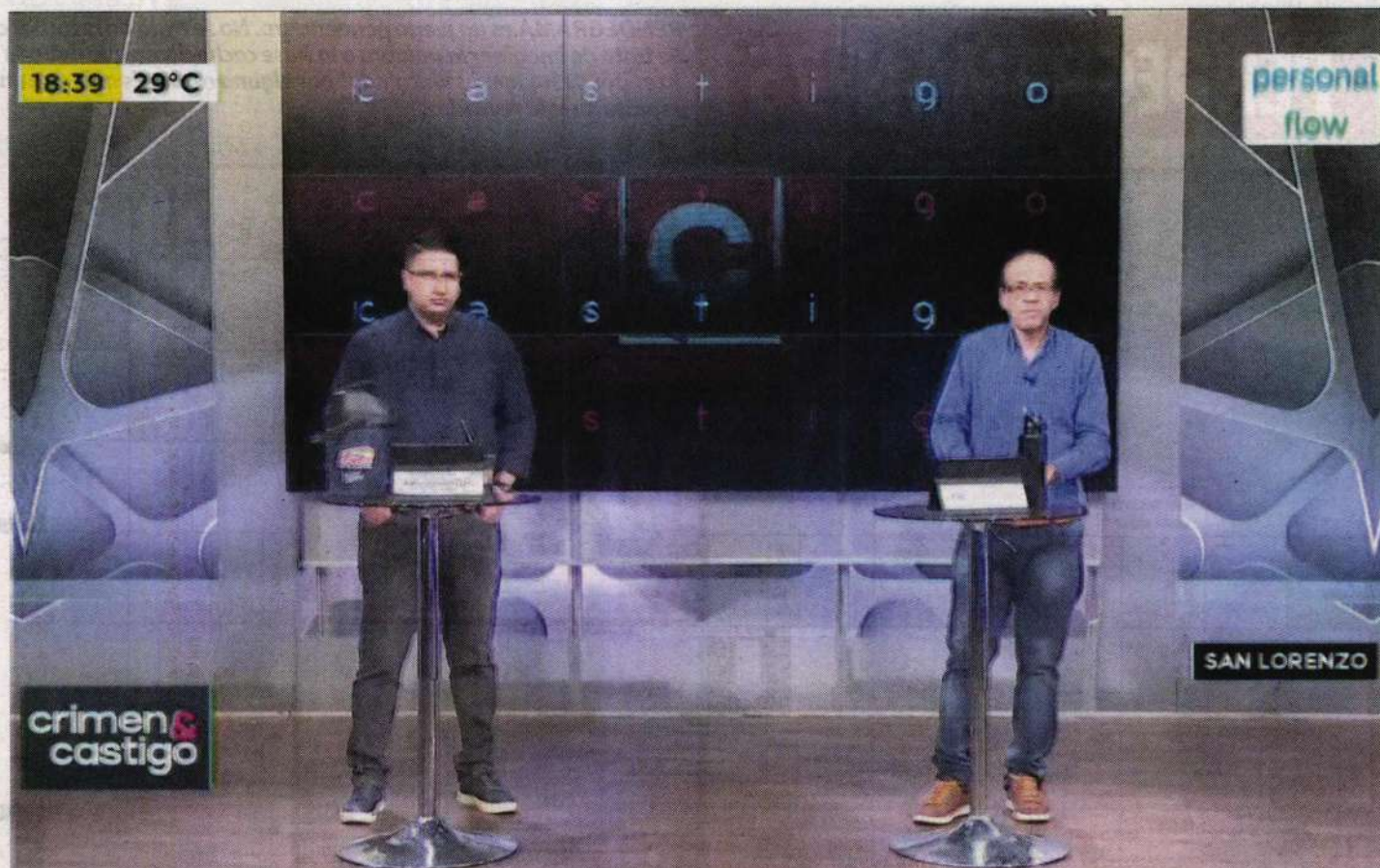
El oficial paraguayo Luis López confirmó la información y dio más detalles sobre el secretismo del operativo. Contó que no se compartió información con la policía peruana antes del operativo. Antes incluso de obtener la orden judicial para la detención, la policía paraguaya cubrió el perímetro de la casa para evitar su fuga. "Ni los compañeros que se encuentran en Perú tenían conocimiento", dijo Luis López.

Para justificar la detención alegaron que el peruano era sospechoso del robo de dos vehículos. Ya detenido, caería sobre él la orden internacional de captura y una orden de prisión preventiva por organización criminal que había sido solicitada por el fiscal Edwin Velásquez.

Cuando los agentes paraguayos entraron a la casa, encontraron a Moreno viendo televisión en un cuarto. Estaba acompañado de una mujer a la que la policía de ese país ha definido como una "compañera casual". No se encontró armas ni dinero. Sólo se le hallaron tres celulares, un DNI y un pasaporte. Ambos documentos llevaban su foto, pero estaban a nombre de Pierre Jesús Neciosup Rodríguez.

Según el comisario Hugo Grance, "El Monstruo" les ofreció un millón de dólares a cambio de su libertad.

"Varios coroneles peruanos salieron a hablar en distintos medios y básicamente se atribuyeron el mérito de la captura. Dieron a entender que los policías paraguayos actuaron con información que les suministraron los peruanos. Eso generó la molestia de la Po-



En la edición del último jueves del programa Crimen y Castigo el periodista Iván Leguizamón (izquierda) dio detalles de la captura de Moreno Hernández. Dijo que la policía peruana no participó en este operativo y apuntó a las sospechas de que las filtraciones previas que favorecieron al Monstruo salieron de Perú.



Luis López, jefe del departamento contra el crimen organizado de Paraguay, señaló que en marzo pasado se frustró una operación contra el Monstruo luego de una "fuga de información internacional".



El comisario paraguayo Hugo Grance ha señalado en la cadena ABC-Color que, para este operativo, decidieron reducir el equipo de agentes que iba a dar el golpe.

lía de Paraguay. No hubo ningún tipo de colaboración en este operativo", ha dicho Iván Leguizamón.

El periodista también denunció en su cuenta de Twitter que "desde la propia policía de Perú casi frustraron la captura del Monstruo, alguien de allá le avisó que lo estaban rodeando". El comisario Grance desmintió esta versión.

Moreno fue presentado esa misma noche a la prensa. Cuando una periodista le preguntó al delincuente si la policía peruana le advertía

de los allanamientos, este respondió: "Siempre, siempre". Aseguró, además, que esa era su mayor protección y que otras organizaciones rivales también tenían comprada a la Policía. No es ninguna novedad.

En junio pasado la Fiscalía de Crimen Organizado detuvo al suboficial Georgi Araujo, al que se le imputó ser informante y receptor del dinero de las extorsiones del Monstruo. "Hay más efectivos policiales que están involucrados

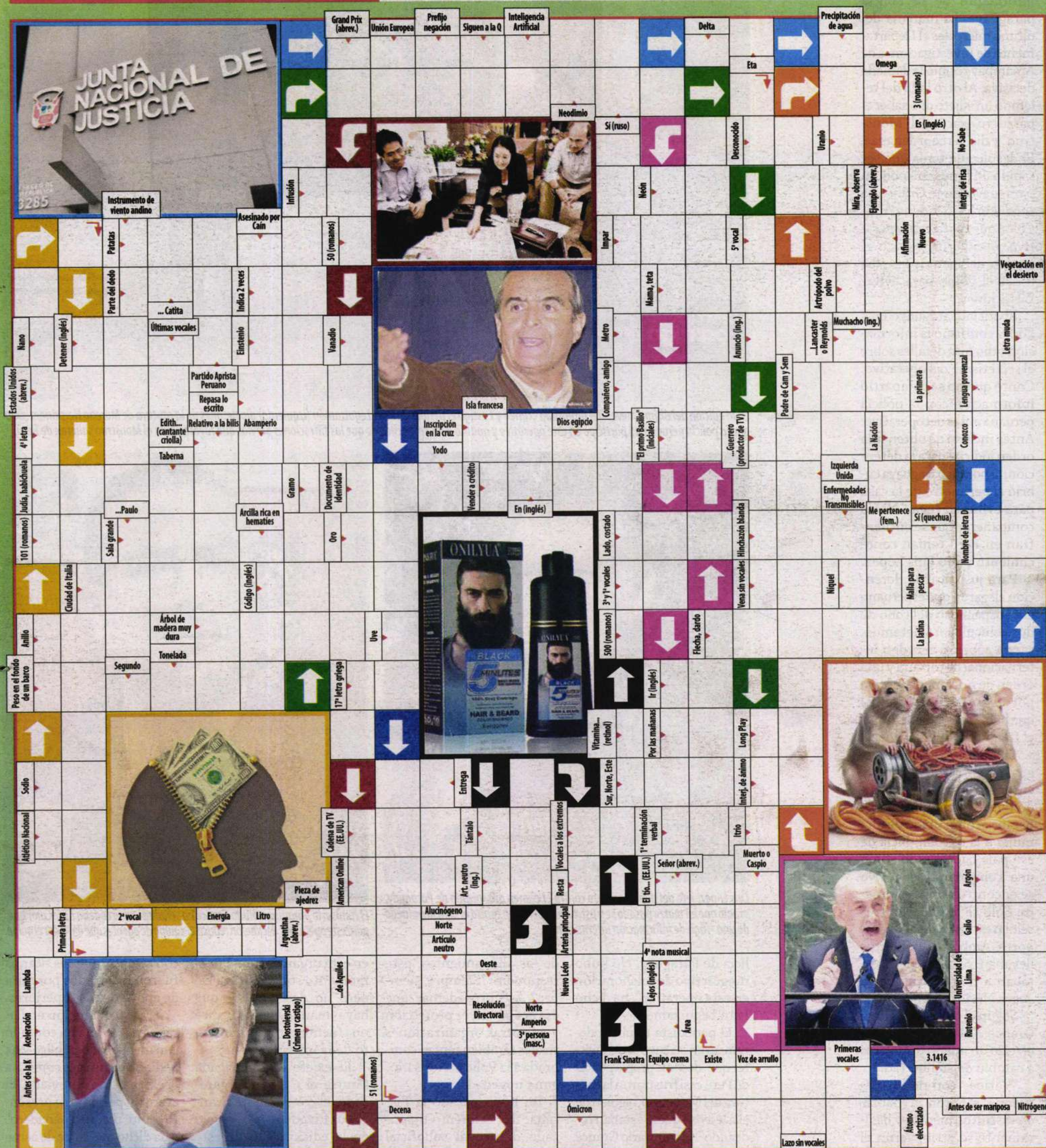
en esta organización. Por el momento son suboficiales, pero no descartamos que haya mandos altos", dice una fuente con conocimiento de la investigación.

El exjefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado, el comandante Francisco Rivadeneyra, reveló en la edición 720 de este semanario que habría 10 suboficiales en la nómina del Monstruo. También contó que al menos dos operativos que iba a llevar a cabo su unidad para dar

con la captura de sus sicarios fueron frustrados por falta de apoyo de sus superiores.

Tras su detención en Paraguay, Moreno ha contado con un abogado público y ha pedido que no se le someta a la extradición abreviada. El criminal peruano se presentó como "maestro panadero" y ha dicho que sufre de asma severa y que no aguantaría un régimen de reclusión en Perú. "Dice que criminales y policías peruanos van a querer deshacerse de él", ha contado Leguizamón.

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachazienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



SEMANARIO
HILDEBRANDT EN SUS TRECE
ES UNA PUBLICACIÓN DE PLUTON EDITORES S.A.C.
AÑO 16, NÚMERO 751
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DIZ REY

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** ALEXANDRA AMPUERO **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com prensa@hildebrandtensustrece.com www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece
TWITTER: @ensustrece IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA SEPTIEMBRE 2025